

No. 34456

MULTILATERAL

Framework Treaty on democratic security in Central America. Concluded at San Pedro Sula on 15 December 1995

Authentic text: Spanish.

Registered by the General Secretariat of the Central-American Integration System, acting on behalf of the Parties, on 5 March 1998.

MULTILATÉRAL

Traité-cadre de sécurité démocratique en Amérique centrale. Conclu à San Pedro Sula le 15 décembre 1995

Texte authentique : espagnol.

Enregistré par le Secrétariat général du système centraméricain d'intégration, agissant au nom des Parties, le 5 mars 1998.

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

TRATADO MARCO DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA EN CENTRO-AMÉRICA

Los Gobiernos de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, en adelante denominados "Las Partes",

CONSIDERANDO

Que el objetivo fundamental del Sistema de la Integración Centroamericana y de la Alianza para el Desarrollo Sostenible es la realización de la integración de Centroamérica para consolidarla como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo;

Que entre los propósitos del Sistema de la Integración Centroamericana, establecidos en el Protocolo de Tegucigalpa, se encuentra la obtención del desarrollo sostenible de Centroamérica, que presupone concretar un Nuevo Modelo de Seguridad Regional único, Integral e Indivisible, Inspirado en los logros alcanzados en su intenso proceso de pacificación e integración;

Que los países Centroamericanos han reafirmado su compromiso con la democracia, basada en el Estado de Derecho y en la garantía de las libertades fundamentales, la libertad económica, la justicia social; afianzando una comunidad de valores democráticos entre los Estados, vinculados por lazos históricos, geográficos, de hermandad y de cooperación;

Que el desarrollo sostenible de Centroamérica sólo podrá lograrse con la conformación de una comunidad jurídica regional, que proteja, tutele y promueva los Derechos Humanos y garantice la seguridad jurídica, y que asegure las relaciones pacíficas e integracionistas entre los Estados de la región;

Que aquellas situaciones que quebranten la paz y afecten la seguridad de cualesquiera de los Estados centroamericanos afectan también a todos los Estados de la región y sus habitantes;

Que la coincidencia en los objetivos de consolidación democrática no es incompatible con el reconocimiento de las particularidades de cada país de la región, lo cual incluye

la situación especial de aquellos que han decidido la eliminación o permanencia constitucional de sus respectivos ejércitos;

Que durante los últimos años, a medida que se ha consolidado la paz y la democracia, los países Centroamericanos han realizado importantes avances en la consecución de estos objetivos mediante la desmovilización y reducción de efectivos y presupuestos militares, la separación de las funciones policíacas de aquellas propias de la defensa nacional, la eliminación del servicio militar forzoso o, en su caso, la adopción de uno voluntario, los esfuerzos y las acciones emprendidas para intensificar la lucha contra la impunidad, el terrorismo y la narcoactividad, así como la creciente profesionalización de las instituciones de seguridad pública, entre otros aspectos;

Que el Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática se sustenta en la supremacía y el fortalecimiento del poder civil, el balance razonable de fuerzas, la seguridad de las personas y de sus bienes, la superación de la pobreza y de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad, el tráfico de armas. Asimismo el Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática orientará cada vez más, sus recursos a la inversión social.

Que es indispensable, para la realización de los objetivos y principios enunciados, la continuación de los esfuerzos mencionados y la adopción de un instrumento jurídico marco que permita desarrollar en forma integral todos los aspectos contenidos en el Nuevo Modelo de Seguridad Democrática que garanticen la vigencia de los logros alcanzados;

convienen en suscribir el presente Tratado de Seguridad Democrática en Centroamérica, como instrumento complementario del Protocolo de Tegucigalpa.

TITULO I ESTADO DE DERECHO

Artículo I. El Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática se basa en la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones y el Estado de Derecho; en la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto y en el irrestricto respeto de todos los derechos humanos en los Estados que conforman la región centroamericana.

El Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática tiene su razón de ser en el respeto, promoción y tutela de todos los derechos humanos, por lo que sus disposiciones garantizan la seguridad de los Estados centroamericanos y sus habitantes, mediante la creación de condiciones que les permita su desarrollo personal, familiar y social en paz, libertad y democracia. Se sustenta en el fortalecimiento del poder civil, el pluralismo político, la libertad económica, la superación de la pobreza y la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenible, la protección del consumidor, del medio ambiente y del patrimonio cultural; la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad y el tráfico de armas; el establecimiento de un balance razonable de fuerzas que tome en cuenta la situación interna de cada Estado y las necesidades de cooperación entre todos los países centroamericanos para garantizar su seguridad.

Artículo 2. El Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática se regirá por los siguientes principios relacionados con este Título:

- a) el Estado de Derecho, que comprende la supremacía del imperio de la ley, la existencia de la seguridad jurídica y el efectivo ejercicio de las libertades ciudadanas;
- b) el fortalecimiento y perfeccionamiento constante de las instituciones democráticas en cada uno de los Estados, para su consolidación mutua dentro de su propia esfera de acción y responsabilidad, por medio de un proceso continuo y sostenido de consolidación y fortalecimiento del poder civil, la limitación del papel de las fuerzas armadas y de seguridad pública a sus competencias constitucionales y la promoción de una cultura de paz, diálogo, entendimiento y tolerancia basada en los valores democráticos que les son comunes;
- c) el principio de la subordinación de las fuerzas armadas, de policía y de seguridad pública, a las autoridades civiles constitucionalmente establecidas, surgidas de procesos electorales, libres, honestos y pluralistas; y
- d) el mantenimiento de un diálogo flexible, activo y la colaboración mutua sobre los aspectos de la seguridad en su sentido Integral a fin de garantizar el carácter irreversible de la democracia en la región.

Artículo 3. Para garantizar la seguridad del individuo, las Partes se comprometen a que toda acción realizada por las autoridades públicas, se enmarque en su respectivo ordenamiento jurídico y el pleno respeto a los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos.

Artículo 4. Cada una de Las Partes establecerá y mantendrá en todo momento un control eficaz sobre sus fuerzas militares o de seguridad pública, por las autoridades civiles constitucionalmente establecidas; velará por que dichas autoridades cumplan con sus responsabilidades en ese marco y definirá claramente la doctrina, misiones y funciones de esas fuerzas y su obligación de actuar únicamente en ese contexto.

Artículo 5. La corrupción, pública o privada, constituye una amenaza a la democracia y la seguridad de los habitantes y de los Estados de la región centroamericana. Las Partes se comprometen a realizar todos los esfuerzos para su erradicación en todos los niveles y modalidades.

En este sentido, la reunión de los entes contralores del Estado de cada una de Las Partes, asesorará a la Comisión de Seguridad en el diseño, establecimiento e instrumentación de programas y proyectos regionales de modernización y armonización legislativa, investigación, educación y prevención de la corrupción.

Artículo 6. Las Partes realizarán todos los esfuerzos para erradicar la impunidad. La Comisión de Seguridad establecerá contactos con las instituciones y autoridades relacionadas con la materia, a fin de contribuir a la elaboración de los programas conducentes a la armonización y modernización de los sistemas de justicia penal centroamericanos.

Artículo 7. Las Partes, reconocen la importancia de que sus autoridades públicas, fuerzas militares y de seguridad pública, orienten su actuación bajo los principios y recomendaciones contenidas en las siguientes resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas:

- a) 40/34 Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para la Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder.
- b) 43/173 Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión.

- c) 45/113 Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad.
- d) 3452 (XXX) Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otras Penas Cruelles, Inhumanas o Degradantes.
- e) 34/169 Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley;

asimismo, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.

Artículo 8. Para el fortalecimiento de la democracia, Las Partes reafirman su obligación de abstenerse de prestar apoyo político, militar, financiero o de cualquier otra índole, a individuos, agrupaciones, fuerzas irregulares o bandas armadas, que atenten contra la unidad y el orden del Estado o propugnen el derrocamiento o la desestabilización del Gobierno democráticamente electo de otra de Las Partes.

Asimismo, reiteran su obligación de impedir el uso de su territorio para organizar o realizar acciones armadas, actos de sabotaje, secuestros o actividades delictivas en el territorio de otro Estado.

Artículo 9. Las Partes reconocen la importancia del Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales, firmado en Guatemala, República de Guatemala, el 29 de octubre de 1993 y la naturaleza especial de las disposiciones constitucionales y los tratados y convenciones que consagran el derecho de asilo y refugio.

TITULO II SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES

Artículo 10. El Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática se regirá por los siguientes principios en lo relacionado con el presente Título:

- a) la seguridad democrática es integral e indivisible. La solución de los problemas de seguridad humana en la región responderá, por tanto, a una visión comprensiva e interrelacionada de todos los aspectos del desarrollo sostenible

de Centroamérica, en sus manifestaciones políticas, económicas, sociales, culturales y ecológicas;

- b) la seguridad democrática es inseparable de la dimensión humana. El respeto a la dignidad esencial del ser humano, el mejoramiento de su calidad de vida y el desarrollo pleno de sus potencialidades, constituyen requisitos para la seguridad en todos sus órdenes;
- c) la ayuda solidaria y humanitaria frente a las emergencias, amenazas y desastres naturales; y,
- d) la consideración de la pobreza y de la extrema pobreza, como amenazas a la seguridad de los habitantes y la estabilidad democrática de las sociedades centroamericanas;

Artículo 11. Con el propósito de contribuir a la consolidación de Centroamérica como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo, se establecen los siguientes objetivos en esta materia:

- a) garantizar a todos los habitantes las condiciones de seguridad que les permitan participar y beneficiarse de las estrategias nacionales y regionales de desarrollo sostenible, mediante el impulso de una economía de mercado que posibilite el crecimiento económico con equidad;
- b) establecer o fortalecer los mecanismos de coordinación operativa de las instituciones competentes, para hacer más efectiva la lucha, a nivel nacional y regional, contra la delincuencia y todas las amenazas a la seguridad democrática que requieran el uso de fuerzas militares, de seguridad o de policía civil, tales como el terrorismo, el tráfico ilícito de armas, la narcoactividad y el crimen organizado;
- c) fortalecer la cooperación, coordinación, armonización y convergencia de las políticas de seguridad de las personas, así como la cooperación fronteriza y la profundización de los vínculos sociales y culturales entre sus poblaciones; y,
- d) promover la cooperación entre los Estados para garantizar la seguridad jurídica de los bienes de las personas.

Artículo 12. La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, tendrá a su cargo la organización y la administración de un Índice Centroamericano de Seguridad e informará periódicamente sobre su estado a los respectivos gobiernos, por medio de la Comisión de Seguridad de Centroamérica.

Artículo 13. Las Partes se comprometen a:

- a) contribuir a impulsar la promoción regional de todos los derechos humanos y de la cultura de paz, democracia e integración entre los habitantes de Centroamérica;
- b) promover la contribución de los medios de comunicación de Las Partes para los fines contemplados en el literal anterior; y,
- c) impulsar proyectos integracionistas de desarrollo fronterizo, en el espíritu de la solidaridad centroamericana y de la participación democrática de los habitantes.

Artículo 14. Las Partes se comprometen a promover la profesionalización y modernización permanente de sus cuerpos de seguridad pública con el objeto de propiciar la más amplia y eficaz lucha contra la actividad delictiva y la protección de los derechos consagrados en la legislación interna de cada país.

Asimismo, se comprometen a poner en funcionamiento el Instituto Centroamericano de Estudios Superiores Policiales.

Artículo 15. Las Partes reconocen que la pobreza y la extrema pobreza lesionan la dignidad humana y constituyen una amenaza a la seguridad de los habitantes y a la estabilidad democrática de las sociedades centroamericanas y, en este sentido, se comprometen a dar prioridad a los esfuerzos por superar sus causas estructurales y a mejorar la calidad de vida de las poblaciones.

Artículo 16. La adecuación de los presupuestos nacionales, de acuerdo a la realidad de cada país, estará orientada al beneficio del sector social en salud, educación y en aquellos otros ámbitos que contribuyan a mejorar la calidad de vida del ser humano, así como de las clases más desprotegidas de la sociedad.

Artículo 17. Las Partes promoverán la cooperación para la erradicación de la narcoactividad, el comercio ilícito de los precursores y delitos conexos, de

conformidad con los acuerdos internacionales, regionales y subregionales de que sean Parte o aquéllos que puedan suscribirse sobre esta materia, particularmente el Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Con este propósito, establecerán mecanismos ágiles y efectivos de comunicación y cooperación entre las autoridades encargadas de la materia.

Artículo 18. Las Partes se comprometen a prevenir y combatir, todo tipo de actividades delictivas con repercusión regional o internacional, sin ninguna excepción, tales como el terrorismo, el sabotaje, el crimen organizado, e impedir por todos los medios dentro de su territorio, la planificación, preparación y realización de las mismas.

Con tal propósito, fortalecerán la cooperación y propiciarán el intercambio de información entre las dependencias responsables en materia migratoria, policial y demás autoridades competentes.

Artículo 19. Las Partes procurarán, en caso que no lo hubieren hecho, iniciar los trámites necesarios para aprobar, ratificar o adherirse a los siguientes convenios internacionales:

- a) Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, de 1963;
- b) Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos Contra las Personas y la Extorsión Conexa cuando éstos tengan Trascendencia Internacional, de 1971;
- c) Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad de la Aviación Civil, de 1971;
- d) Convención sobre la Represión y Castigo de Delitos contra las Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos, de 1973;
y,
- e) Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, de 1979.

Artículo 20. Las Partes se comprometen a tomar medidas para combatir la acción de bandas organizadas, que se dedican al tráfico de personas con trascendencia internacional en la región, a fin de encontrar soluciones integrales a este problema.

Artículo 21. Las Partes se comprometen a desarrollar todos los esfuerzos necesarios y promover la cooperación para garantizar la protección del consumidor, del medio ambiente y del patrimonio cultural centroamericano, de conformidad con los acuerdos internacionales y regionales de que sean Parte o aquellos que puedan suscribirse sobre estas materias, particularmente el Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. Con este propósito establecerán mecanismos ágiles y efectivos de comunicación y cooperación entre las autoridades encargadas de la materia.

Artículo 22. Las Partes reconocen que para una efectiva cooperación en estas áreas, es imprescindible, en caso de que no lo hubiesen hecho, iniciar los trámites necesarios para aprobar, ratificar o adherirse a los convenios internacionales y regionales sobre la protección del medio ambiente y el patrimonio cultural.

Artículo 23. Las Partes reafirman su voluntad de reinsertar apropiadamente a su población refugiada, desplazada y desarraigada que retome voluntaria y pacíficamente a sus respectivos territorios, para que pueda disfrutar todos sus derechos y mejorar su calidad de vida en igualdad de oportunidades, tomando en cuenta la situación interna de cada Estado.

Artículo 24. Las Partes se comprometen a adoptar posiciones y estrategias conjuntas para la defensa legítima de sus respectivos connacionales en el exterior, frente a medidas tendientes a la repatriación o expulsión de sus connacionales emigrantes.

Artículo 25. La Comisión de Seguridad, en base a las propuestas que reciba de los órganos regionales competentes y en coordinación con éstos, formulará y trasladará a los Consejos sectoriales o intersectoriales respectivos, recomendaciones sobre las siguientes materias, entre otras:

- a) reforzamiento de los controles internos en las respectivas fronteras, puertos, aeropuertos, espacio aéreo y mar territorial que permitan la detección del tráfico ilegal de bienes culturales y faciliten su recuperación; del comercio ilícito de madera, de especies de flora y fauna, del tráfico y manipulación de desechos tóxicos y sustancias peligrosas; de la narcoactividad y delitos conexos, en particular el comercio ilícito de precursores, lavado de dinero y otros activos; el robo de vehículos, naves y aeronaves, sin perjuicio de aquellos mecanismos regionales que se acuerden para la prevención y sanción de dichos delitos;

- b) creación de figuras delictivas y la armonización y modernización de la legislación sobre la protección del consumidor, del medio ambiente y del patrimonio cultural y demás materias que así lo requieran, con miras a lograr un estándar común de seguridad;
- c) celebración de acuerdos sobre las materias comprendidas en este título; y,
- d) propiciar la cooperación y coordinación entre los órganos jurisdiccionales y los ministerios públicos de Las Partes con miras a agilizar sus acciones encaminadas a fortalecer la lucha contra la delincuencia.

TITULO III SEGURIDAD REGIONAL

Artículo 26. El Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática se regirá por los siguientes principios, en lo relacionado con el presente título:

- a) la igualdad soberana entre los Estados y la seguridad jurídica en sus relaciones;
- b) la solución pacífica de las controversias, renunciando a la amenaza o al uso de la fuerza como medio para resolver sus diferencias. Los Estados se abstendrán de cualquier acción que pueda agravar los conflictos u obstaculizar el arreglo de eventuales controversias por medios pacífico;
- c) la renuncia a la amenaza o al uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de cualquier Estado de la región signatario del presente Tratado;
- d) la autodeterminación de Centroamérica, por la cual los Estados signatarios del presente Tratado, definen su propia estrategia regional de desarrollo sostenible y de concertación internacional;
- e) la solidaridad y seguridad de los pueblos y gobiernos centroamericanos en la prevención y solución conjunta de los problemas comunes en esta materia;
- f) la prohibición del uso del territorio para agredir a otros Estados, como refugio de fuerzas irregulares o para el establecimiento del crimen organizado;

- g) la seguridad democrática de cada uno de los Estados signatarios del presente Tratado está estrechamente vinculada a la seguridad regional. Por tanto, ningún Estado fortalecerá su propia seguridad menoscabando la seguridad de los demás;
- h) la defensa colectiva y solidaria en caso de agresión armada de un Estado situado fuera de la región contra la integridad territorial, la soberanía y la independencia de un estado centroamericano, de conformidad con las normas constitucionales respectivas y los tratados internacionales vigentes;
- i) la unidad nacional y la integridad territorial de los Estados en el marco de la integración centroamericana; y,
- j) el respeto a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas (ONU) y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Artículo 27. Son objetivos complementarios del Modelo en esta materia:

- a) establecer un mecanismo preventivo, de alerta temprana, ante las amenazas a la seguridad en cualquiera de sus categorías y un programa permanente de medidas de fomento de la confianza entre los Estados de la región centroamericana;
- b) continuar los esfuerzos para el establecimiento de un balance razonable de fuerzas militares y de seguridad pública de acuerdo con la situación interna y externa de cada Estado Parte, las condiciones de Centroamérica y lo que decidan las autoridades civiles de los Gobiernos democráticamente electos de Las Partes;
- c) establecer un Mecanismo Centroamericano de Información y Comunicación de la Seguridad;
- d) establecer o fortalecer los mecanismos centroamericanos de solución pacífica de las controversias, de conformidad con lo previsto en el presente Tratado;
- e) coordinar regionalmente las formas de cooperación con los esfuerzos de carácter internacional en el mantenimiento y el restablecimiento de la paz y la seguridad internacionales; y,

- f) promover la seguridad jurídica de las fronteras de los Estados signatarios del presente Tratado, por medio de las delimitaciones, demarcaciones y solución de diferendos territoriales pendientes, en los casos que corresponda, y garantizar la defensa común del patrimonio territorial, cultural y ecológico de Centroamérica, de acuerdo a los mecanismos del Derecho Internacional.

Artículo 28. Sin perjuicio del Programa Anual de Actividades de Fomento de la Confianza, que deberá preparar y ejecutar la Comisión de Seguridad, Las Partes, de conformidad con los tratados de que sean Parte, se comprometen a:

- a) notificar por escrito a las demás Partes, por la vía diplomática, con no menos de treinta días de antelación, cualquier manobra, desplazamiento o ejercicio militar, terrestre, aéreo o naval planificado, que se realice bajo las condiciones que determine la Comisión de Seguridad en cuanto a: número de efectivos, ubicación respecto a la frontera, naturaleza y cantidad de equipo que se utilizará, entre otros; y,
- b) invitar a las otras Partes para que presencien el desarrollo de las actividades antes mencionadas. Las Partes reconocerán a dichos observadores las inmunidades de jurisdicción civil y penal acordadas para los agentes diplomáticos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, durante el tiempo que dure su misión y para aquellos actos realizados en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 29. Si se tratare de operaciones militares imprevistas, frente a amenazas inmediatas a la seguridad, el Estado que las lleve a cabo deberá informar de tales actividades tan pronto como le sea posible, dentro de las condiciones previstas en el artículo anterior.

Artículo 30. Las Partes se obligan a combatir el tráfico ilegal de armas, material y equipos militares, así como de armas ligeras de protección personal. Con este propósito se comprometen asimismo, a establecer en el ámbito de sus ordenamientos jurídicos nacionales, regulaciones específicas, modernas y armonizadas.

Artículo 31. Cuando una situación de tráfico ilegal de armas no pueda ser resuelta en el marco de los procedimientos jurídicos nacionales, el o los Estados involucrados procurarán resolver el problema por medio de la comunicación y la cooperación entre sus autoridades competentes.

Artículo 32. Las Partes se comprometen a continuar los esfuerzos para la limitación y control de armamentos, por medio de un balance razonable de fuerzas, de acuerdo a la situación interna y externa de cada Estado.

Artículo 33. El balance razonable y la correspondiente adecuación de las fuerzas militares y presupuestos, tomarán en cuenta lo establecido en la Constitución de cada una de Las Partes, y sus necesidades de defensa, teniendo como base factores tales como condiciones geográficas y fronteras relevantes, y la presencia de fuerza o asesores militares extranjeros, entre otros.

Artículo 34. Las Partes se comprometen a abstenerse de adquirir, mantener o permitir el estacionamiento o tránsito en sus territorios de armas de destrucción masiva e indiscriminada, incluyendo las armas químicas, radiológicas y bacteriológicas. Las Partes se obligan, igualmente, a no construir o permitir la edificación en sus respectivos territorios, instalaciones que sirvan para fabricar o almacenar este tipo de armas.

Las Partes reconocen la vigencia del Tratado concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal y al funcionamiento del Canal de Panamá, como Estados adherentes al Protocolo del Tratado, el cual garantiza en todo tiempo el tránsito pacífico e ininterrumpido de las naves de todas las naciones por el Canal de Panamá.

Artículo 35. Las Partes, a fin de tener un efectivo control sobre los armamentos, se comprometen a lo siguiente:

- a) presentar, en el seno de la Comisión de Seguridad, con la periodicidad que establezca el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, un informe sobre la composición de sus instituciones armadas y de seguridad pública, su organización, instalaciones, armamentos, materiales y equipo, dejando a salvo aquellos aspectos que por su naturaleza se encuentren reservados en la Constitución de cada Estado;

El informe, con carácter de secreto de Estado y regional, será elaborado de conformidad con el formato y contenido de inventario que acuerde la Comisión de Seguridad e incluirá todos los datos navales, aéreos, terrestres y de seguridad pública, necesarios para que la información proporcionada sea completa, transparente y verificable, única y exclusivamente por las instancias del modelo establecido en el Artículo 47 del presente Tratado o por quienes éstas designen;

- b) proporcionar información, en el seno de la Comisión de Seguridad, sobre sus respectivos gastos militares y de seguridad pública aprobados en sus presupuestos para el año fiscal en ejercicio, tomando como marco de referencia para ello el "Instrumento para la Presentación Internacional Normalizada de Informes sobre Gastos Militares" adoptado por la Organización de las Naciones Unidas, el 12 de diciembre de 1990, de conformidad con lo establecido en el literal k) del Artículo 52 del presente Tratado; y,
- c) organizar el sistema de registro centroamericano de los armamentos y sus transferencias, de acuerdo con la propuesta que elabore la Comisión de Seguridad.

Artículo 36. Respecto a toda la información proporcionada conforme a lo dispuesto en el Artículo anterior, cada Parte podrá solicitar, en el seno de la Comisión de Seguridad, a cualquier otra de Las Partes, las aclaraciones que estime necesarias, durante el curso de los sesenta días posteriores a su entrega. Las Partes se obligan a hacer las aclaraciones pertinentes dentro de los sesenta días posteriores a la fecha de solicitud de aclaración.

Artículo 37. La Comisión de Seguridad organizará un registro uniforme para el armamento, explosivos y equipo que es de uso exclusivo de las fuerzas armadas o de seguridad pública; éste registro deberá estar actualizado con información que las Partes se comprometen a proveer constantemente.

Artículo 38. Las Partes se comprometen a presentar, en forma recíproca y de conformidad con los Tratados de que sean Parte, en el seno de la Comisión de Seguridad, en el primer semestre de cada año, un informe sobre asesores y personal militar extranjero y otros elementos foráneos que participen en actividades militares o de seguridad pública en su territorio. Asimismo, llevará un registro de dichos asesores que desempeñen funciones de carácter técnico relacionadas con entrenamiento o con la instalación y mantenimiento de equipo militar, copia del cual proveerá a la Comisión de Seguridad.

El registro se llevará de conformidad con la reglamentación que acuerde la Comisión de Seguridad, la que podrá, además, acordar límites razonables en el número de asesores en todas sus categorías y especialidades militares y de seguridad pública, tomando en cuenta las realidades y necesidades internas de cada Parte.

Artículo 39. Si se produjese un incidente de índole militar entre dos o más de Las Partes, los Ministros de Relaciones Exteriores deberán ponerse en contacto de inmediato para analizar la situación, evitar el aumento de la tensión, cesar cualquier actividad militar y prevenir nuevos incidentes.

Artículo 40. En caso de que los canales directos de comunicación no fuesen suficientes para alcanzar los objetivos descritos en el artículo anterior, cualquiera de Las Partes podrá solicitar la convocatoria de una reunión de la Comisión de Seguridad o del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, si así lo estimase necesario. En este último caso, la presidencia del Consejo de Ministros hará las consultas necesarias con los estados miembros y podrá convocar previamente a la Comisión de Seguridad para obtener sus recomendaciones.

Artículo 41. La Reunión de Presidentes, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de Seguridad, tomarán sus decisiones por consenso, en todos los asuntos relativos a la paz y la seguridad de la región.

Artículo 42. Cualquier agresión armada, o amenaza de agresión armada, de un estado situado fuera de la región contra la integridad territorial, la soberanía o la independencia de un estado centroamericano, será considerada como un acto de agresión contra los demás estados centroamericanos.

En tal caso, los países centroamericanos, a petición del estado agredido, actuarán conjuntamente y de manera solidaria, para asegurar en los foros y organismos internacionales la defensa jurídica y política, por la vía diplomática, del estado centroamericano agredido.

Artículo 43. En caso de agresión armada, agotadas las instancias de conciliación y solución pacífica de los conflictos, si fuese posible, los países centroamericanos, a petición del estado agredido, asegurarán para el pronto restablecimiento de la paz, la defensa colectiva y solidaria frente al agresor, mediante las medidas y procedimientos que se acuerden en el seno del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de conformidad con las respectivas disposiciones constitucionales, la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y los tratados vigentes de que sean Parte.

El Consejo de Ministros establecerá una organización operativa ad hoc encargada de planificar y coordinar el cumplimiento de los compromisos contenidos en este Artículo,

así como para el apoyo operativo en materia de cooperación solidaria frente a emergencias, amenazas y desastres.

Artículo 44. En la eventualidad de algún conflicto armado externo y para preservar las garantías y los derechos de la población, Las Partes se comprometen a cumplir plenamente con las normas y principios del Derecho Internacional Humanitario.

Artículo 45. Sin perjuicio de lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos sobre arreglo pacífico de controversias, Las Partes reafirman su obligación de resolver cualquier diferencia que pueda poner en peligro la paz y la seguridad de la región, por la vía de la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial o cualquier otro medio pacífico de solución de controversias.

Artículo 46. Las Partes reafirman las obligaciones asumidas en el Tratado de Tlatelolco para la Proscripción de Armas Nucleares en la América Latina, del 14 de febrero de 1967, así como la importancia de iniciar en caso de que no lo hubiesen hecho, los trámites necesarios para aprobar, ratificar o adherirse a los siguientes convenios internacionales:

- a) Protocolo para la Prohibición del Empleo en la Guerra de Gases Asfixiantes Tóxicos y Similares, de 1925; y
- b) Convenio sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción y Almacenamiento de Armas Bacteriológicas, Biológicas, Tóxicas y Sobre su Destrucción, de 1972;

TITULO IV ORGANIZACION E INSTITUCIONALIDAD

Artículo 47. Son instancias del Modelo de Seguridad Democrática en Centroamérica las siguientes:

- a) la Reunión de Presidentes;
- b) el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores; y,
- c) la Comisión de Seguridad.

Los Consejos sectoriales e intersectoriales establecerán las coordinaciones necesarias con el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, al que informarán de todos sus acuerdos y resoluciones en materia de seguridad.

En ese contexto, los Ministros de Defensa y de Seguridad o sus equivalentes, asesorarán y asistirán al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, en los asuntos relativos a la ejecución del mismo, en las áreas de su competencia.

El Comité Consultivo creado por el Protocolo de Tegucigalpa podrá exponer, por conducto de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, sus opiniones a la Comisión de Seguridad sobre las materias concernientes a la seguridad de las personas y sus bienes previstas en este Tratado.

Artículo 48. La Reunión de Presidentes es la instancia suprema de este modelo y a ella corresponde conocer los asuntos de seguridad, regional e internacional, que requieran de sus decisiones de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Tegucigalpa.

Artículo 49. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores es la instancia competente, en todo lo relativo a la seguridad regional e internacional, en su condición de órgano principal de coordinación del Sistema de la Integración Centroamericana.

Artículo 50. La Comisión de Seguridad es una instancia subsidiaria de ejecución, coordinación, evaluación y seguimiento, de elaboración de propuestas, así como de recomendaciones de alerta temprana, y cuando proceda, de pronta acción, subordinada a la Reunión de Presidentes y al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores.

Artículo 51. La Comisión de Seguridad está compuesta por las delegaciones de los estados centroamericanos integradas por los Viceministros de Relaciones Exteriores y Viceministros o autoridades competentes en los ramos de Defensa y Seguridad Pública. Los Viceministros de Relaciones Exteriores presidirán las delegaciones de cada estado.

Artículo 52. Son responsabilidades o funciones de la Comisión de Seguridad:

- a) ejecutar las decisiones que, en materia de seguridad, le encomiende la Reunión de Presidentes o el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y aquellas que ella misma adopte en el marco de sus competencias;

- b) evaluar el cumplimiento de los acuerdos centroamericanos en materia de seguridad;
- c) examinar los problemas de seguridad existentes en la región que requieran de una acción concertada y elaborar propuestas para enfrentarlos de manera efectiva. Dichos estudios y recomendaciones serán elevados al conocimiento del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores para su aprobación;
- d) establecer la comunicación y las coordinaciones necesarias, por medio de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, con los Organismos, Instituciones y Secretarías de los subsistemas de integración regional, cuya colaboración se estime necesaria para enfrentar de manera integral los problemas de la seguridad;
- e) fortalecer los mecanismos de coordinación operativa en las áreas de defensa, seguridad pública y cooperación humanitaria frente a las emergencias, amenazas y desastres naturales;
- f) elaborar propuestas de coordinación y apoyo regional con los organismos y cuerpos internacionales dedicados al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y la lucha contra las amenazas a la seguridad de las personas y sus bienes, las que serán elevadas previamente al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores para su aprobación;
- g) organizar el Mecanismo Centroamericano de Información y Comunicación para la Seguridad;
- h) elaborar un programa anual permanente de actividades de fomento de la confianza, que involucren la participación de las fuerzas armadas y de seguridad pública de la región, conjuntamente con la sociedad civil centroamericana;
- i) elaborar el régimen de los informes periódicos y el sistema de registro de los armamentos y sus transferencias, de manera que la información proporcionada sea completa, transparente y fácilmente verificable, y hacer propuestas para el establecimiento gradual de un balance razonable de fuerzas en la región;
- j) examinar la información proporcionada por Las Partes sobre asesores y personal militar extranjero y otros elementos foráneos que participen en actividades

- militares o de seguridad pública en su territorio, de conformidad con lo establecido en los Artículo 38 del presente Tratado;
- k) examinar la información proporcionada por los gobiernos sobre sus respectivos presupuestos militares y de seguridad para el año fiscal en ejercicio y elaborar propuestas conjuntas para la eventual adecuación de los presupuestos futuros, tomando en cuenta la situación interna de cada estado;
 - l) establecer contacto con las organizaciones centroamericanas que agrupan a otros Poderes u Organos del Estado, a fin de acordar programas de armonización y modernización legislativa sobre la materia y programas de capacitación de funcionarios judiciales y policiales;
 - m) elaborar su reglamento interno de funcionamiento, el que se hará del conocimiento del Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana;
 - n) proporcionar todas las medidas de protección necesarias para la seguridad y confidencialidad de la información, que se reciba de los diferentes estados centroamericanos; y,
 - ñ) velar por el cumplimiento de las disposiciones del presente Tratado y cumplir con las demás funciones que el mismo le confiere.

Artículo 53. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Seguridad podrá organizar sus trabajos en subcomisiones sectoriales, las cuales podrán ser de defensa, de seguridad pública, jurídica o intersectoriales.

Artículo 54. La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana brindará los servicios de secretaría técnica administrativa, en las reuniones de la Comisión de Seguridad y de las subcomisiones.

Artículo 55. La Comisión de Seguridad se reunirá ordinariamente con la periodicidad que establezcan sus miembros y extraordinariamente, en cumplimiento de una decisión de la Reunión de Presidentes o del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores o cuando así lo solicite uno o varios de sus miembros, para examinar un asunto con carácter de urgencia. El quórum requerido para las sesiones será el de la presencia de todos sus miembros.

Artículo 56. La falta de consenso en la adopción de una decisión, facultará a la presidencia de la Comisión de Seguridad, a elevar el tema al conocimiento del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores para su resolución.

Artículo 57. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, en su calidad de Organismo Principal de Coordinación del Sistema de la Integración Centroamericana, será el responsable de adoptar o recomendar a la Reunión de Presidentes las medidas preventivas, de manejo de crisis o de solución de conflictos y controversias que estime pertinentes frente a las situaciones de cualquier índole que, a juicio de los gobiernos o de los Organismos Competentes del Sistema de la Integración Centroamericana, constituyan una potencial amenaza a la seguridad de los estados y de sus habitantes.

Artículo 58. Los Gobiernos, por medio de sus respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores, someterán al examen de las situaciones previstas en el artículo anterior a la Comisión de Seguridad. Podrán, asimismo, acudir directamente al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores.

Los Organismos, Instituciones, y Secretarías del Sistema de la Integración Centroamericana, por medio de su Secretaría General, podrán llamar a la atención del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, sobre cualquier situación prevista en el Artículo anterior.

Artículo 59. Sin perjuicio del Programa Anual de Actividades de Fomento de la Confianza, que deberá preparar y ejecutar la Comisión de Seguridad, Las Partes se comprometen a:

- a) establecer y fortalecer mecanismos de comunicación directa y expedita entre las autoridades fronterizas; y,
- b) propiciar intercambios de experiencias e información militar y de seguridad pública, consultas y visitas periódicas entre autoridades de instituciones de defensa, seguridad pública y similares, así como el otorgamiento recíproco de becas de estudio en sus respectivas academias militares y de policía.

Artículo 60. El Mecanismo Centroamericano de Información y Comunicación para la Seguridad estará conformado por:

- a) el Índice Centroamericano de Seguridad, organizado y administrado por la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana con el apoyo

de las Secretarías e Instituciones de la Integración centroamericana y de los organismos internacionales que se estime pertinentes; y,

- b) el mecanismo permanente de comunicación que Las Partes se comprometen a crear y poner en funcionamiento, para facilitar el contacto seguro, eficaz y rápido, entre las respectivas autoridades civiles, militares y de seguridad pública competentes, entre sí y con la Comisión de Seguridad, con el objeto de prevenir incidentes, atender alertas y facilitar el cumplimiento de los objetivos y obligaciones establecidos en el presente Tratado.

Artículo 61. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores velará por la aplicación de las disposiciones y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Tratado.

Para estos propósitos la Comisión de Seguridad deberá informar al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, en particular sobre los siguientes aspectos:

- a) el cumplimiento por Las Partes de los actos materiales previstos en este Tratado, tal como la entrega oportuna de los informes requeridos;
- b) el cumplimiento por Las Partes con los límites máximos de armamentos que lleguen a establecerse, tomando en cuenta la situación interna y externa de cada una de Las Partes y las condiciones imperantes en la región;
- c) el cumplimiento por Las Partes, de la obligación de no introducción de armas prohibidas en el Artículo 34 del presente Tratado o que lleguen en un futuro a prohibirse;
- d) el cumplimiento por Las Partes de las obligaciones en materia de notificación de actividades o maniobras militares, así como otras notificaciones, contenidas en este Tratado; y,
- e) el resultado de las investigaciones que por propia iniciativa o por mandato del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, lleve a cabo en relación a denuncias de violación de las obligaciones contenidas en el presente Tratado.

Artículo 62. Las investigaciones serán llevadas a cabo por la Comisión de Seguridad o por el cuerpo colegiado de expertos ad hoc que ésta designe y estime más apropiado

para el caso. Serán realizadas mediante inspecciones in situ, la recopilación de datos, la realización de pruebas técnicas de laboratorio y cualquier otro procedimiento que se estime necesario para la objetiva verificación de los hechos.

Artículo 63. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores será el órgano encargado de coordinar los esfuerzos de la región en su conjunto, con las iniciativas en la lucha contra las amenazas a la seguridad democrática en el continente y otras partes del mundo, y en este sentido, será el órgano responsable de preparar posiciones y suscribir los acuerdos o convenios de cooperación con las instituciones y cuerpos encargados de mantener la paz y la seguridad internacionales, dejando a salvo los compromisos preestablecidos de cada Estado Parte con la comunidad internacional.

TITULO V DISPOSICIONES FINALES

Artículo 64. El Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática es parte del Sistema de la Integración Centroamericana y su contenido complementa las disposiciones del Protocolo de Tegucigalpa, a las cuales está subordinado el presente Tratado.

Artículo 65. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores informará a las Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos, todos los arreglos o decisiones que tengan que ver con la paz y la seguridad regional y cuyo conocimiento consideren de relevancia para los órganos encargados de la seguridad a nivel hemisférico y mundial.

Artículo 66. Ninguna disposición del presente Tratado podrá ser interpretada de manera contraria a lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en el Protocolo de Tegucigalpa.

Artículo 67. Toda controversia sobre la aplicación o interpretación del presente Tratado será elevada al conocimiento de la Reunión de Presidentes y, en caso de no resolverse, se utilizarán los medios de solución pacífica de las controversias estipulados en el Artículo 45, y en su caso, serán sometidas al conocimiento de la Corte Centroamericana de Justicia.

Artículo 68. El presente Tratado admite reservas.

Artículo 69. El presente Tratado será ratificado por cada Estado signatario, de acuerdo con sus respectivas normas constitucionales. El presente Tratado y los Instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana.

Artículo 70. El presente Tratado tendrá una duración indefinida y entrará en vigencia una semana después de ser depositado el tercer instrumento de ratificación, para los tres primeros estados depositantes, y a la fecha de depósito de sus respectivos instrumentos de ratificación para los demás estados.

Artículo 71. A los cinco años de haber entrado en vigor el presente Tratado, y antes o después, a solicitud de dos Estados Parte, la Comisión de Seguridad convocará a una reunión de todas Las Partes con el propósito de evaluar y acordar las modificaciones que estimen necesarias. Dichas modificaciones serán sometidas a consideración de la Reunión de Presidentes, por intermedio del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores.

Artículo 72. Las denuncias al presente Tratado deberán comunicarse al depositario, quien notificará las mismas a Las Partes. Dichas denuncias producirán sus efectos un año después de su notificación; sin embargo, las disposiciones del presente Tratado se seguirán aplicando a aquellos proyectos y acciones regionales en ejecución hasta tanto éstas finalicen. Este Tratado permanecerá en vigencia en tanto permanezcan vinculados a él por lo menos tres de los Estados Parte.

Artículo 73. Las disposiciones del presente Tratado se interpretarán y aplicarán de conformidad con su letra, su espíritu y a la luz del Protocolo de Tegucigalpa y las normas del Derecho Internacional.

Artículo 74. La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, al entrar en vigor el presente Tratado, procederá a enviar copia certificada del mismo a la Secretaría General de las Naciones Unidas, para los efectos del artículo 102, párrafo 2, de la Carta de esa Organización, y a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

TITULO VI DISPOSICION ESPECIAL

Artículo 75. Las Repúblicas de Costa Rica y Panamá suscriben el presente Tratado con expresa reserva de los siguientes artículos: 26 literales g) y h); 27 literales a), b), c); 28; 29; 32; 33; 35; 36; 37; 38, 42 y 43.

TITULO VII DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 76. Mientras entre en vigencia el presente Tratado, la Comisión de Seguridad continuará funcionando de conformidad con los mandatos recibidos de la Reunión de Presidentes y los que se deriven del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y respetará la finalidad del presente Tratado.

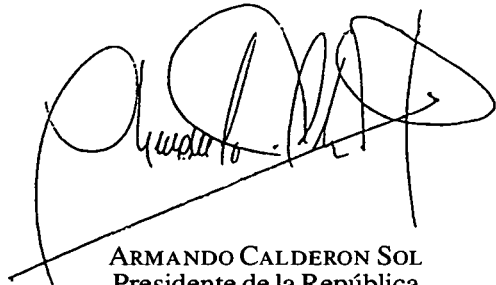
Artículo 77. Las Partes fortalecerán sus esfuerzos para la obtención de la cooperación técnica y financiera que contribuya a la eliminación de la existencia de campos minados en la región, de conformidad con los acuerdos internacionales, regionales y subregionales de que sean Parte o aquellos que se suscriban en la materia.

Artículo 78. El presente Tratado sustituye todas las normas que en materia de seguridad o defensa estén contenidas y se enmarquen en la Carta de la Organización de los Estados Centro Americanos (ODECA) y los acuerdos supletorios que, para su desarrollo, se hubieren adoptado a nivel regional.

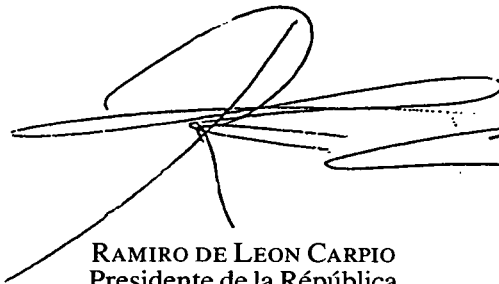
EN FE DE LO CUAL, suscriben el presente Tratado en siete originales del mismo tenor, en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, República de Honduras, a los quince días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.



JOSÉ MARÍA FIGUERES OLSEN
Presidente de la República
de Costa Rica



ARMANDO CALDERON SOL
Presidente de la República
de El Salvador



RAMIRO DE LEON CARPIO
Presidente de la República
de Guatemala



CARLOS ROBERTO REINA
Presidente de la República
de Honduras



JULIO MENA RIVERA
Vicepresidente de la República
de Nicaragua



TOMAS GABRIEL ALTAMIRANO DUQUE
Primer Vicepresidente
de la República de Panamá

[TRANSLATION — TRADUCTION]

FRAMEWORK TREATY¹ ON DEMOCRATIC SECURITY IN CENTRAL AMERICA

The Governments of the Republics of Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama, hereinafter referred to as “the Parties”,

Whereas

The fundamental purpose of the Central American Integration System and the Alliance for the Sustainable Development of Central America is to achieve the integration of Central America with a view to the consolidation of its status as a region of peace, freedom, democracy and development;

One of the purposes of the Central American Integration System established in the Tegucigalpa Protocol² is to ensure sustainable development in Central America, which presupposes the realization of a single, comprehensive and indivisible New Regional Security Model, inspired by the advances made in its concerted efforts to promote peace and integration;

The Central American countries have reaffirmed their commitment to democracy, based on the rule of law and the guarantee of fundamental freedoms, economic freedom and social justice; and on strengthening the democratic values shared by those States, which have historical and geographical ties and are linked by brotherhood and cooperation;

The sustainable development of Central America can be achieved only within the framework of a shared regional juridical system which protects, nurtures and promotes human rights, guarantees juridical safeguards and ensures peaceful and integrationist relations among the States of the region;

Any situations which disturb the peace and affect the security of any of the Central American States also affect all States in the region as well as their inhabitants;

A shared commitment to the objective of democratic consolidation is not incompatible with recognition of the special character of each country of the region, which includes the special situation of those which have decided to abolish or to maintain, in accordance with their Constitutions, their respective armed forces;

The Central American countries, as peace and democracy have been strengthened, have in recent years made important advances in the realization of these objectives through demobilization, reduction in the size and budgets of their armed forces, separation of police functions from those linked to national defence, elimination of compulsory military service or, alternatively, introduction of voluntary serv-

¹ Came into force on 26 December 1997, in accordance with article 70:

<i>Participant</i>	<i>Date of deposit of the instrument of ratification</i>
El Salvador.....	10 March 1997
Honduras.....	18 December 1997
Nicaragua.....	1 August 1996

² United Nations, *Treaty Series*, vol. 1695, p. 382.

ice, efforts and measures to step up the struggle against impunity, terrorism and drug trafficking, as well as increasing professionalization of public security institutions, among other aspects;

The Central American Democratic Security Model is founded on the supremacy and strengthening of civil authority, the reasonable balance of forces, the security of persons and their property, the eradication of poverty and extreme poverty, the promotion of sustainable development, the protection of the environment, the eradication of violence, corruption, impunity, terrorism and drug and arms trafficking. The Central American Democratic Security Model shall also increasingly devote its resources to social investment;

It is essential for the realization of the above objectives and principles that the efforts mentioned should continue and that a framework juridical instrument should be adopted in order to facilitate the comprehensive development of all components of the new Democratic Security Model in order to guarantee that the advances made are sustained;

Agree to sign the present Treaty on democratic security in Central America, as a complementary instrument to the Tegucigalpa Protocol.

TITLE I

RULE OF LAW

Article 1

The Central American Democratic Security Model is based on democracy and strengthening of democratic institutions and the rule of law; on the existence of Governments elected by universal suffrage in a free and secret vote and on unconditional respect for all human rights in those States which make up the Central American region.

The Central American Democratic Security Model owes its existence to the respect, promotion and nurture of all human rights, to which end its provisions guarantee the security of the Central American States and their inhabitants, through the creation of conditions to facilitate their personal, family and social development in peace, freedom and democracy. It is sustained by the strengthening of civil authority, political pluralism, economic freedom, eradication of poverty and extreme poverty, promotion of sustainable development, and protection of the consumer, the environment and the cultural heritage; the eradication of violence, corruption, impunity, terrorism and drug and arms trafficking; the establishment of a reasonable balance of forces reflecting the internal situation of each State and the need for cooperation among all Central American countries in order to guarantee their security.

Article 2

The Central American Democratic Security Model shall be governed by the following principles with respect to this title:

(a) The rule of law, including the supremacy of the rule of law, the existence of juridical safeguards and effective exercise of civic freedoms;

(b) The constant strengthening and perfecting of democratic institutions in each State, contributing to democracy within the limits of its authority and respon-

sibility, by means of a continuous and sustained process of consolidation and strengthening of civil authority, limitation of the role of the armed forces and public security forces to their constitutional duties and promotion of a culture of peace, dialogue, understanding and tolerance based on their shared democratic values;

(c) The principle of subordination of the armed forces, police and public security forces to the constitutionally established civil authorities, chosen in free, honest and pluralist electoral processes; and

(d) The maintenance of a flexible and active dialogue and mutual cooperation on all issues of security in its broadest sense with a view to ensuring the irreversible nature of democracy in the region.

Article 3

In order to guarantee the security of the individual, the Parties agree that any action undertaken by the public authorities shall occur within the framework of their respective juridical order and with full respect for international human rights instruments.

Article 4

Each Party shall establish and maintain at all times effective control by the constitutionally established civil authorities over its military or public security forces, shall ensure that those authorities fulfil their responsibilities in that regard and shall clearly define the doctrine, missions and functions of those forces and their obligation to act only within that context.

Article 5

Corruption, public or private, constitutes a threat to democracy and to the security of the inhabitants of the States of the Central American region. The Parties undertake to make every effort to eradicate corruption at all levels and in all its forms.

To that end, the competent authorities of each of the Parties shall meet to advise the Security Commission on the design, establishment and implementation of regional programmes and projects for legislative modernization and harmonization, investigation, education and corruption prevention.

Article 6

The Parties shall make every effort to abolish impunity. The Security Commission shall establish contacts with the relevant institutions and authorities in that regard, with a view to the formulation of programmes leading to the harmonization and modernization of Central American criminal justice systems.

Article 7

The Parties recognize that it is important for their public authorities, military and public security forces to be guided in the performance of their duties by the principles and recommendations contained in the following resolutions of the United Nations General Assembly:

(a) 40/34,¹ Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power;

(b) 43/173,² Body of Principles for the Protection of all Persons under Any Form of Detention or Imprisonment;

(c) 45/113,³ United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty;

(d) 3452 (XXX),⁴ Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment;

(e) 34/169,⁵ Code of Conduct for Law Enforcement Officials,

as well as by the Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.

Article 8

In order to strengthen democracy, the Parties reaffirm their commitment to refrain from providing political, military, financial or any other support to individuals, groups, irregular forces or armed bands which threaten the unity and order of a State or advocate the overthrow or destabilization of the democratically elected Government of any other Party.

They also reaffirm their commitment to prevent the use of their territory for planning or carrying out armed actions, acts of sabotage, kidnappings or criminal activities in the territory of another State.

Article 9

The Parties recognize the importance of the Treaty on mutual legal assistance in criminal matters signed at Guatemala City, Guatemala, on 29 October 1993⁶ and the special nature of the constitutional provisions, treaties and conventions which govern the right of asylum and the status of refugee.

TITLE II

SECURITY OF PERSONS AND THEIR PROPERTY

Article 10

The Central American Democratic Security Model shall be governed by the following principles with respect to this title:

(a) Democratic security is absolute and indivisible. Resolution of human security problems in the region shall therefore reflect a comprehensive and interrelated vision of all aspects of sustainable development in Central America, in its political, economic, social, cultural and ecological aspects;

¹ United Nations, *Official Records of the General Assembly, Fourthieth Session, Supplement No. 53 (AJ/40/53)*, p. 213.

² *Ibid.*, *Fourty-third Session, Supplement No. 49 (AJ/43/49)*, p. 297.

³ *Ibid.*, *Fourty-fifth Session, Supplement No. 49 (AJ/45/49)*, p. 204.

⁴ *Ibid.*, *Thirtieth Session, Supplement No. 34 (A/100/34)*, p. 91.

⁵ *Ibid.*, *Thirty-fourth Session, Supplement No. 46 (AJ/34/46)*, p. 185.

⁶ See No. I-34455 of this volume.

(b) Democratic security is inseparable from its human dimension. Respect for the basic dignity of the human being, the improvement of quality of life and full development of human potential, are also requirements for security in all its forms;

(c) Assistance in a spirit of solidarity and humanitarianism to deal with emergencies, threats and natural disasters; and

(d) The belief that poverty and extreme poverty are threats to the security of their peoples and to the democratic stability of Central American societies.

Article 11

With a view to contributing to the consolidation of Central America as a region of peace, freedom, democracy and development, the following goals are hereby established:

(a) To guarantee conditions of security for all inhabitants which allow them to participate in and benefit from national and regional sustainable development strategies driven by a market economy facilitating equitable economic growth;

(b) To establish or strengthen the operational coordination mechanisms of relevant institutions to enhance national and regional efforts to combat crime and all threats to democratic security which require the use of military, security or civil police forces, such as terrorism, illegal arms trafficking, drug trafficking and organized crime;

(c) To strengthen cooperation, coordination, harmonization and convergence of security policies for individuals, as well as border cooperation, and enhance social and cultural ties among their peoples; and

(d) To promote cooperation among the States with a view to guaranteeing the juridical security of personal property.

Article 12

The General Secretariat of the Central American Integration System shall be responsible for the organization and administration of a Central American Security Index and shall report regularly on its status to the respective governments through the Central American Security Commission.

Article 13

The Parties agree to:

(a) Assist at the regional level in the promotion of all human rights and the culture of peace, democracy and integration among the inhabitants of Central America;

(b) Encourage the communications media in their States to participate in the promotion of the goals set in (a) above; and

(c) Promote integrationist order development projects in a spirit of Central American solidarity and democratic participation by their peoples.

Article 14

The Parties agree to promote the ongoing professionalization and modernization of their public security forces with a view to combating criminal activity in the

most comprehensive and effective manner and protecting the rights enshrined in the domestic legislation of each country.

They also agree to make operational the Central American Institute for Advanced Police Studies.

Article 15

The Parties recognize that poverty and extreme poverty are detrimental to human dignity and constitute a threat to the security of their populations and to democratic stability in Central American societies and, mindful of that fact, agree to give priority to efforts to overcome the structural causes of poverty and to improve the quality of life of their peoples.

Article 16

National budgets shall be adjusted to reflect the real situation in each country, with a view to benefiting the social sector in the areas of health and education as well as other areas which contribute to improving the quality of life of the human person, including the most defenceless classes of society.

Article 17

The Parties shall promote cooperation for the eradication of drug trafficking and illegal trafficking in precursor substances and related crimes, in accordance with international, regional and subregional agreements to which they are parties or any other agreements which they may sign in that area, in particular the Agreement Establishing the Permanent Central American Commission for the Eradication of the Illicit Production, Trafficking, Consumption and Use of Drugs and Psychotropic Substances. To that end, they shall establish rapid and effective mechanisms for communication and cooperation among the competent authorities in that area.

Article 18

The Parties agree to prevent and combat without exception all types of criminal activities having regional or international repercussions, such as terrorism, sabotage and organized crime, and to prevent by every possible means the planning, preparation and realization of such acts within their territory.

To that end they shall strengthen cooperation and promote the exchange of information among the units responsible for migration and police issues as well as any other competent authorities.

Article 19

The Parties shall, if they have not already done so, initiate the necessary proceedings to approve, ratify or accede to the following international conventions:

- (a) Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, 1963;¹
- (b) Convention to Prevent and Punish the Acts of Terrorism Taking the Form of Crimes against Persons and Related Extortion that are of International Significance, 1971;²

¹ United Nations, *Treaty Series*, vol. 704, p. 219.

² *Ibid.*, vol. 1438, p. 191.

(c) Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, 1971;¹

(d) Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, 1973;² and

(e) International Convention against the Taking of Hostages, 1979.³

Article 20

The Parties agree to take measures to combat the actions of organized bands trafficking in persons and having international repercussions in the region, with a view to finding comprehensive solutions to that problem.

Article 21

The Parties agree to take whatever steps are necessary to guarantee the protection of the consumer, the environment and Central America's cultural heritage and to promote cooperation to that end, in accordance with the international and regional agreements to which they may be party or to which they may become party in those areas, in particular the Articles of Agreement of the Central American Commission on Environment and Development. To that end, they shall establish rapid and effective mechanisms for communication and cooperation among the competent authorities in that area.

Article 22

The Parties recognize that in order to ensure effective cooperation in those areas it is essential for them, if they have not already done so, to initiate the necessary proceedings to approve, ratify or accede to the international and regional conventions on the protection of the environment and cultural heritage.

Article 23

The Parties reaffirm their intention to reintegrate in an appropriate manner any refugees or displaced or uprooted persons who return voluntarily and peacefully to their respective territories, so that they may enjoy full exercise of their rights and improve their quality of life in a climate of equal opportunity, taking into account the internal situation in each State.

Article 24

The Parties agree to adopt joint positions and strategies for the legitimate defence of their nationals abroad, in response to measures linked to the repatriation or expulsion of their emigrant nationals.

Article 25

The Security Commission shall, on the basis of proposals it may receive from the competent regional bodies and in coordination with them, prepare and transmit to the respective sectoral or intersectoral councils recommendations on, *inter alia*, the following matters:

¹ United Nations, *Treaty Series*, vol. 974, p. 177.

² *Ibid.*, vol. 1035, p. 167.

³ *Ibid.*, vol. 1316, p. 205.

(a) Strengthening of domestic controls at their respective borders, ports, airports and in their airspace and territorial waters, in order to facilitate the detection of illegal trafficking in cultural property and the recovery of such property, illegal trading in wood and species of flora and fauna, trafficking in and processing of toxic wastes and dangerous substances, drug trafficking and related crimes, in particular the illicit traffic in precursor substances, money laundering and other activities and theft of vehicles, vessels and aircraft, without prejudice to any regional mechanisms which may be adopted for the prevention and punishment of such crimes;

(b) Definition of new crimes and harmonization and modernization of legislation on the protection of the consumer, the environment and cultural heritage and any other matters as required, with a view to developing a common security standard;

(c) Conclusion of agreements on the matters covered in this title; and

(d) Promotion of cooperation and coordination among the jurisdictional bodies and public prosecutor's offices of the Parties for the purpose of expediting their action to enhance crime prevention.

TITLE III

REGIONAL SECURITY

Article 26

The Central American Democratic Security Model shall be governed by the following principles, in respect of this title:

(a) Sovereign equality among the States and juridical safeguards in their relations;

(b) Peaceful settlement of disputes, with renunciation of the threat or use of force as a means for resolving their differences. States shall refrain from any action which might aggravate conflicts or obstruct the peaceful settlement of any disputes which may arise;

(c) Renunciation of the threat or use of force against the sovereignty, territorial integrity and political independence of any State in the region which is a signatory of the present Treaty;

(d) Self-determination of Central America, by virtue of which the States signatories of the present Treaty may define their own regional strategy for sustainable development and international cooperation;

(e) Solidarity among and security for the peoples and Governments of Central America in the prevention and joint solution of shared problems in that area;

(f) Prohibition of the use of a territory for the launching of attacks against other States, as a refuge for irregular forces or for the establishment of organized crime;

(g) Democratic security for each of the States signatories of the present Treaty is closely linked to regional security. For that reason, no State shall strengthen its own security to the detriment of the security of the others;

(h) Collective defence and solidarity in cases of armed aggression by a State located outside the region against the territorial integrity, sovereignty and indepen-

dence of a Central American State, in accordance with each State's respective constitutional norms and existing international treaties;

(i) National unity and territorial integrity of the States within the framework of Central American integration; and

(j) Respect for the purposes and principles of the Charter of the United Nations and the Charter of the Organization of American States (OAS).¹

Article 27

The Model has the following complementary security objectives:

(a) Establishment of a preventive early warning mechanism to deal with threats to security of any kind, as well as a permanent programme of confidence-building measures among the States of the Central American region;

(b) Continued efforts for the creation of a reasonable balance of military and public security forces reflecting the internal and external situation of each State party, conditions in Central America and the decisions of the civil authorities of the democratically elected Governments of the Parties;

(c) Establishment of a Central American Security Information and Communications Mechanism;

(d) Establishment or strengthening of Central American mechanisms for the peaceful settlement of disputes, in keeping with the provisions of the present Treaty;

(e) Regional coordination of cooperation measures with international efforts to maintain and restore international peace and security; and

(f) Promotion of the juridical security of the borders of the States signatories of the present Treaty, by delimiting and demarcating borders and resolving outstanding territorial disputes, whenever necessary, and by ensuring joint defence of the territorial, cultural and ecological heritage of Central America, in accordance with the mechanisms of international law.

Article 28

Without prejudice to the annual programme of confidence-building activities to be prepared and implemented by the Security Commission, the Parties, in accordance with the treaties to which they may be party, undertake to:

(a) Provide to the other Parties through the diplomatic channel at least 30 days' prior notice of any manoeuvres, troop movements or plans for military, land, air or naval exercises which shall follow guidelines established by the Security Commission concerning, *inter alia*, the number of personnel involved, location in relation to the border, type and quantity of equipment to be used; and

(b) Invite the other Parties to observe the activities mentioned above. The Parties shall grant to such observers the same immunity from civil and criminal jurisdiction as is granted to diplomatic representatives under the Vienna Convention on Diplomatic Relations² for the duration of their mission and for any actions committed in the exercise of their functions.

¹ United Nations, *Treaty Series*, vol. 119, p. 3.

² *Ibid.*, vol. 500, p. 95.

Article 29

In the case of unexpected military operations in reaction to immediate threats to its security, the State in question shall provide information on such activities as soon as possible in accordance with the requirements mentioned above.

Article 30

The Parties undertake to combat illegal trafficking in weapons and military matériel and equipment, as well as light weapons for personal protection. They also undertake to incorporate specific, modern and harmonized regulations for that purpose in their national juridical legislation.

Article 31

Whenever a case of illegal arms trafficking cannot be resolved within the framework of domestic juridical procedures, the State or States involved shall seek to solve the problem by means of communication and cooperation among their competent authorities.

Article 32

The Parties undertake to continue efforts for arms limitation and control, by maintaining a reasonable balance of forces, in accordance with the internal and external situation of each State.

Article 33

The reasonable balance and corresponding adjustment in military forces and budgets shall take into account the provisions of the Constitution of each State party and its defence needs, based on factors such as relevant geographical and border conditions and the presence of foreign military forces or advisers, among others.

Article 34

The Parties undertake to refrain from acquiring, maintaining or permitting the stationing in or transit through their territories of weapons of mass and indiscriminate destruction, including chemical, nuclear and bacteriological weapons. The Parties also undertake not to construct or permit the construction of facilities for the manufacture or stockpiling of such weapons in their respective territories.

The Parties recognize the validity of the Treaty Concerning the Permanent Neutrality and Operation of the Panama Canal¹ as States which acceded to the Protocol² to that treaty, which guarantees for all time the peaceful and unimpeded transit of vessels of all nations through the Panama Canal.

Article 35

The Parties, in order to maintain effective control of armaments, make the following commitments:

(a) To present, within the framework of the Security Commission, at intervals to be established by the Council of Ministers for Foreign Affairs, a report on the composition, organization, facilities, armaments, material and equipment of their

¹ United Nations, *Treaty Series*, vol. 1161, p. 177.

² *Ibid.*, p. 201.

armed forces and public security institutions, excluding any information which by its nature is considered as classified under the Constitution of each State;

That report, to be kept confidential by the State and the region, shall be prepared in accordance with the format and content requirements decided by the Security Commission and shall include all naval, air, land and public security data necessary to ensure that the information provided is complete, transparent and verifiable, and shall be for the sole and exclusive use of the authorities described in the Model established in article 47 of the present Treaty, or by their delegates;

(b) To provide information, within the Security Commission, on their respective military and public security expenditures as approved in their budget for the current fiscal year, using as a model for that purpose the "Reporting instrument on military expenditures in standardized form" adopted by the United Nations on 12 December 1990, in accordance with subparagraph (k) of article 52 of the present Treaty; and

(c) To organize a Central American system for the registration and transfer of weapons, in accordance with the proposal to be made by the Security Commission.

Article 36

With regard to any information provided in compliance with the provisions of the preceding article, each Party may, within the Security Commission, request any other Party to furnish such clarification as it deems necessary within a period of 60 days following the presentation of the above information. The Parties agree to provide the relevant clarifications within 60 days of any request for clarification.

Article 37

The Security Commission shall organize a standardized register of weapons, explosives and equipment for the exclusive use of the armed or public security forces; this register shall be updated with information which the Parties undertake to provide on an ongoing basis.

Article 38

The Parties agree to provide to each other, in accordance with the treaties to which they are party, and within the Security Commission, in the first six months of each year, a report on advisers and foreign military personnel and other foreign representatives participating in military or public security activities in its territory. They shall also maintain a register of any advisers performing functions of a technical nature related to training or the installation and maintenance of military equipment, a copy of which shall be provided to the Security Commission.

The register shall be maintained in accordance with regulations drawn up by the Security Commission, which shall also have the power to set reasonable limits on the number of advisers in all military and public security categories and specialties, taking into account the domestic realities and needs of each Party.

Article 39

In the event of an incident of a military nature between two or more of the Parties, the Ministers for Foreign Affairs shall immediately contact each other to review the situation, avoid any increase in tension, put an end to any military activity and prevent new incidents.

Article 40

If direct channels of communication do not suffice to achieve the objectives described in the preceding article, any Party may request a meeting of the Security Commission or the Council of Ministers for Foreign Affairs, if this is deemed necessary. In the latter case, the President of the Council of Ministers shall undertake any necessary consultations with member States and may first convene the Security Commission to seek its opinion.

Article 41

The Meeting of Presidents, the Council of Ministers for Foreign Affairs and the Security Commission shall take decisions by consensus in all matters relating to peace and security in the region.

Article 42

Any armed aggression or threat of armed aggression by a State located outside the region against the territorial integrity, sovereignty or independence of a Central American State, shall be considered an act of aggression against the other Central American States.

In such event, the Central American countries shall, at the request of the threatened State, act jointly and in a spirit of solidarity to ensure the juridical and political defence of that threatened Central American State through the diplomatic channel in international forums and bodies.

Article 43

In the event of armed aggression, and having exhausted forums for conciliation and peaceful conflict resolution, the Central American countries shall, if possible, and at the request of the threatened State, ensure the rapid restoration of peace through collective defence and solidarity against the aggressor, by means of measures and procedures agreed in the Council of Ministers for Foreign Affairs and in accordance with their respective constitutional provisions, the Charter of the United Nations, the Charter of the Organization of American States and the treaties to which they are party.

The Council of Ministers shall establish an *ad hoc* operational body responsible for planning and coordinating the implementation of the commitments contained in this article, as well as for operational support in the area of joint cooperation to deal with emergencies, threats and disasters.

Article 44

In the event of an external armed conflict, in order to preserve the guarantees and rights of the population, the Parties undertake to comply fully with the standards and principles of international humanitarian law.

Article 45

Without prejudice to the provisions of the Charter of the United Nations and the Charter of the Organization of American States concerning the peaceful settlement of disputes, the Parties reaffirm their commitment to settle any dispute which may endanger the peace and security of the region by means of negotiation, investigation, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement or any other peaceful means of dispute resolution.

Article 46

The Parties reaffirm the commitments made in the Treaty of Tlatelolco on the prohibition of nuclear weapons in Latin America of 14 February 1967, as well as the importance of initiating, if they have not already done so, the necessary procedures to approve, ratify or accede to the following international Conventions:

(a) Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases and of Bacteriological Methods of Warfare, 1925;¹ and

(b) Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction, 1972.²

TITLE IV

ORGANIZATION AND INSTITUTIONS

Article 47

The institutions created under the Central American Democratic Security Model are the following:

(a) The Meeting of Presidents;

(b) The Council of Ministers for Foreign Affairs; and

(c) The Security Commission.

The sectoral and intersectoral councils shall establish the necessary links with the Council of Ministers for Foreign Affairs, which shall be kept informed of all their agreements and resolutions relating to security.

In this context, the Ministers of Defence and Security or their equivalents shall advise and assist the Council of Ministers for Foreign Affairs in matters relating to the implementation of security in their respective areas of responsibility.

The Consultative Committee created by the Tegucigalpa Protocol may, through the General Secretariat of the Central American Integration System, communicate its views to the Security Commission on matters relating to security of persons and property covered in this Treaty.

Article 48

The Meeting of Presidents is the supreme body of this Model and shall deal with both regional and international security issues which require its attention in accordance with the provisions of the Tegucigalpa Protocol.

Article 49

The Council of Ministers for Foreign Affairs is the competent authority in all matters relating to regional and international security in its capacity as principal coordinating body for the Central American Integration System.

¹ United Nations, *Treaty Series*, vol. 94, p. 65.

² *Ibid.*, vol. 1015, p. 163.

Article 50

The Security Commission is the designated authority for the implementation, coordination, evaluation, follow-up, and formulation of proposals and early warning recommendations and, where appropriate, for rapid action, subordinate to the Meeting of Presidents and the Council of Ministers for Foreign Affairs.

Article 51

The Security Commission is composed of delegations from the Central American States represented by the Deputy Ministers for Foreign Affairs and Deputy Ministers or competent authorities in the areas of defence and public security. The Deputy Minister for Foreign Affairs shall lead the delegation of each State.

Article 52

The responsibilities or functions of the Security Commission are to:

(a) Implement decisions in security matters entrusted to it by the Meeting of Presidents or the Council of Ministers for Foreign Affairs as well as any decisions taken by it on its own authority;

(b) Review compliance with Central American agreements in the area of security;

(c) Study security problems existing in the region which require concerted action and make proposals to deal with them effectively. Such studies and recommendations shall be brought to the attention of the Council of Ministers for Foreign Affairs for its approval;

(d) Create any necessary communication and coordination links, through the General Secretariat of the Central American Integration System, with any bodies, institutions and secretariats of regional integration subsystems, whose cooperation is deemed necessary for a comprehensive approach to security problems;

(e) Strengthen operational coordination mechanisms in the areas of defence, public security and humanitarian cooperation to deal with emergencies, threats and natural disasters;

(f) Develop proposals for coordination and regional support with international organizations and bodies working to maintain international peace and security and combat threats to the security of persons and their property, subject to prior approval from the Council of Ministers for Foreign Affairs;

(g) Organize the Central American security information and communication mechanisms;

(h) Develop an ongoing annual programme of confidence-building activities, involving the participation of the armed forces and public security forces of the region, in conjunction with Central American civil society;

(i) Develop the periodic reporting system and the register of armaments and their transfer, so that the information provided will be complete, transparent and easily verifiable, and make proposals for the gradual creation of a reasonable balance of forces in the region;

(j) Review the information provided by the Parties on foreign advisers and military personnel and other foreign nationals participating in military or public

security activities in their territory, in accordance with article 38 of the present Treaty;

(k) Review the information provided by Governments on their respective military and security budgets for the current fiscal year and develop joint proposals for the possible adjustment of future budgets, taking into account the domestic situation in each State;

(l) Establish contact with the Central American organizations in which other State authorities or bodies participate with a view to agreeing on legislative harmonization and modernization programmes in the area of training material and programmes for judicial and police personnel;

(m) Develop its own internal operating rules, which shall be notified to the Executive Committee of the Central American Integration System;

(n) Take the necessary measures to protect the security and confidentiality of information received from the various Central American States; and

(o) Monitor implementation of the provisions of the present Treaty and perform the other functions assigned to it therein.

Article 53

In order to better perform its duties, the Security Commission may organize its work into sectoral subcommissions, for example for the areas of defence, public security, juridical questions, or into intersectoral subcommissions.

Article 54

The General Secretariat of the Central American Integration System shall provide technical and administrative secretariat services for meetings of the Security Commission and its subcommissions.

Article 55

The Security Commission shall meet regularly at intervals to be decided by its members, as well as in special session following a decision by the Meeting of Presidents or the Council of Ministers for Foreign Affairs or whenever requested to do so by one or more of its members to deal with an urgent matter. The quorum required for such sessions shall be the presence of the entire membership.

Article 56

If the Commission is unable to achieve consensus on any decision, the Chairman of the Security Commission shall be authorized to refer the matter to the Council of Ministers for Foreign Affairs for a decision.

Article 57

The Council of Ministers for Foreign Affairs, in its capacity as the main coordinating body for the Central American Integration System, shall be responsible for adopting or recommending to the Meeting of Presidents preventive measures, crisis management or conflict and dispute resolution measures which it may deem necessary to deal with situations of any type which, in the opinion of the Governments or competent bodies of the Central American Integration System, may constitute a potential threat to the security of the States and their inhabitants.

Article 58

The Governments, through their respective Ministries of Foreign Affairs, shall submit the situations described in the preceding article to the Security Commission for review. They may also refer such matters directly to the Council of Ministers for Foreign Affairs.

The bodies, institutions and secretariats of the Central American Integration System, through its Secretary-General, may bring any situation described in the preceding article to the attention of the Council of Ministers for Foreign Affairs.

Article 59

Without prejudice to the annual programme of confidence-building activities to be prepared and implemented by the Security Commission, the Parties undertake to:

(a) Establish and strengthen direct and expeditious communication mechanisms between border authorities; and

(b) Encourage exchanges of experience and military and public security information, periodic consultations and visits between authorities representing defence, public security and similar institutions, and the mutual granting of scholarships for study at their respective military and police academies.

Article 60

The Central American security information and communications mechanism shall consist of:

(a) The Central American Security Index, organized and administered by the General Secretariat of the Central American Integration System with the support of Central American integration secretariats and institutions and other international bodies as deemed necessary; and

(b) The permanent communication mechanism which the Parties undertake to create and put into operation, in order to facilitate secure, effective and rapid communication between the competent civil, military and public security authorities, among themselves and with the Security Commission, with a view to preventing incidents, issuing warnings and facilitating the achievement of the objectives and obligations set out in the present Treaty.

Article 61

The Council of Ministers for Foreign Affairs shall ensure the implementation of the provisions of this Treaty and compliance with the commitments established therein.

To that end the Security Commission shall keep the Council of Ministers for Foreign Affairs informed on the following aspects, in particular:

(a) Fulfilment by the Parties of the material acts provided for in this Treaty, such as timely submission of the required reports;

(b) Compliance by the Parties with the maximum limits on armaments which may be established taking into account the domestic and external situation of each of the Parties and the prevailing conditions in the region;

(c) Compliance by the Parties with the commitment not to introduce weapons prohibited under article 34 of the present Treaty or which may be prohibited in the future;

(d) Compliance by the Parties with the commitments made under this Treaty in the area of notice of military manoeuvres or activities as well as other notices; and

(e) The findings of any inquiries which it may undertake on its own authority or by order of the Council of Ministers for Foreign Affairs in relation to complaints of violations of the obligations contained in the present Treaty.

Article 62

The inquiries shall be carried out by the Security Commission or by an *ad hoc* body of qualified experts appointed by it as being most appropriate for the case in question. They shall involve on-site inspections, data-gathering, technical laboratory testing and any other procedure deemed necessary for objective verification of the facts.

Article 63

The Council of Ministers for Foreign Affairs shall be the body responsible for coordinating the efforts of the region as a whole with initiatives to combat threats to democratic security on the continent and in other parts of the world, and to that effect shall be the body responsible for preparing positions and concluding cooperation agreements or conventions with institutions and bodies responsible for maintaining international peace and security, without prejudice to the pre-existing commitments of each State party in the international community.

TITLE V

FINAL PROVISIONS

Article 64

The Central American Democratic Security Model is part of the Central American Integration System and its content complements the provisions of the Tegucigalpa Protocol, which take precedence over the present Treaty.

Article 65

The Council of Ministers for Foreign Affairs shall inform the United Nations and the Organization of American States of all arrangements or decisions relating to regional peace and security which in its opinion are of interest to the bodies responsible for security at the hemispheric and international levels.

Article 66

Nothing in the present Treaty shall be interpreted as contradicting the provisions of the Charter of the United Nations, the Charter of the Organization of American States and the Tegucigalpa Protocol.

Article 67

Any disagreement on the application or interpretation of the present Treaty shall be brought to the attention of the Meeting of Presidents and, if no solution is found, the matter shall be referred to the measures for the peaceful settlement of

disputes set out in article 45 and shall if necessary be submitted to the Central American Court of Justice for a decision.

Article 68

Reservations may be made to the present Treaty.

Article 69

The present Treaty shall be ratified by each signatory State in accordance with its respective constitutional norms. The present Treaty and the instruments of ratification shall be deposited with the General Secretariat of the Central American Integration System.

Article 70

The present Treaty shall be of unlimited duration and shall enter into force one week after the third instrument of ratification has been deposited, for the first three depositary States, and on the date of deposit of their respective instruments of ratification, for the other States.

Article 71

Five years after the entry into force of the present Treaty, as well as before or after, at the request of two States parties, the Security Commission shall convene a meeting of all the Parties for the purpose of reviewing and reaching agreement on any amendments deemed necessary. Such amendments shall be submitted to the Meeting of Presidents for its consideration, through the Council of Ministers for Foreign Affairs.

Article 72

Denunciations of the present Treaty shall be communicated to the depository body, which shall notify the other Parties thereof. Any denunciation shall take effect one year after notification; nevertheless, the provisions of the present Treaty shall continue to apply to any regional projects and actions under way, until their conclusion. This Treaty shall remain in force so long as at least three of the States parties remain bound by it.

Article 73

The provisions of the present Treaty shall be interpreted and implemented in accordance with their letter and spirit and in the light of the Tegucigalpa Protocol and the norms of international law.

Article 74

Upon the entry into force of the present Treaty, the General Secretariat of the Central American Integration System shall send a certified copy thereof to the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102, paragraph 1, of the Charter of that Organization, and to the General Secretariat of the Organization of American States.

TITLE VI

SPECIAL PROVISION

Article 75

The Republics of Costa Rica and Panama accede to the present Treaty with the exception of the following: articles 26, (g) and (h); 27, (a), (b) and (c); 28; 29; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 42 and 43.

TITLE VII

TEMPORARY PROVISIONS

Article 76

Pending the entry into force of the present Treaty, the Security Commission shall continue to function in accordance with the mandates received from the Meeting of Presidents and the Council of Ministers for Foreign Affairs and shall act in the spirit of the objectives of the present Treaty.

Article 77

The Parties shall strengthen their efforts to obtain technical and financial assistance to help in the elimination of minefields in the region, in accordance with international, regional and subregional agreements to which they may be party or to which they may become party in that area.

Article 78

The present Treaty replaces all norms in the area of security or defence which may be included or set out in the Charter of the Organization of Central American States (ODECA) and any additional agreements adopted at the regional level with a view to its implementation.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned have signed the present Treaty in seven identical originals, at the city of San Pedro Sula, Department of Cortés, Republic of Honduras, on 15 December 1995.

JOSÉ MARÍA FIGUERES OLSEN
President of the Republic
of Costa Rica

ARMANDO CALDERON SOL
President of the Republic
of El Salvador

RAMIRO DE LEON CARPIO
President of the Republic
of Guatemala

CARLOS ROBERTO REINA
President of the Republic
of Honduras

JULIO MENA RIVERA
Vice-President of the Republic
of Nicaragua

TOMAS GABRIEL ALTAMIRANO DUQUE
First Vice-President
of the Republic of Panama

[TRADUCTION — TRANSLATION]

TRAITÉ-CADRE¹ DE SÉCURITÉ DÉMOCRATIQUE EN AMÉRIQUE CENTRALE

Les Gouvernements des Républiques de Costa Rica, de El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et de Panama, ci-après dénommés « les Parties »,

Considérant

Que l'objectif fondamental du Système d'intégration de l'Amérique centrale et de l'Alliance pour le développement durable est de réaliser l'intégration de l'Amérique centrale pour en renforcer le caractère de Région de paix, de liberté, de démocratie et de développement;

Que, parmi les buts du Système d'intégration de l'Amérique centrale, définis dans le Protocole de Tegucigalpa, figure celui de parvenir à un développement durable de l'Amérique centrale, ce qui suppose la réalisation concrète d'un nouveau modèle de sécurité régionale unique, complet et indivisible, inspiré des succès obtenus au cours du processus intense de pacification et d'intégration mené à ce jour;

Que les pays centraméricains ont réaffirmé leur engagement en faveur d'une démocratie fondée sur l'état de droit et la garantie des libertés fondamentales, la liberté économique, la justice sociale qui étaye une communauté de valeurs démocratiques entre des Etats, unis par des liens historiques, géographiques, de fraternité et de coopération;

Que le développement durable de l'Amérique centrale ne peut être réalisé qu'en formant une communauté juridique régionale qui protège, sauvegarde et promeuve les droits de l'homme, garantisse la sécurité juridique et assure des relations pacifiques visant à l'intégration entre les Etats de la région;

Que les situations qui ébranlent la paix et portent atteinte à la sécurité de l'un quelconque des Etats centraméricains affectent également tous les Etats de la région et leurs habitants;

Que l'accord sur les objectifs de consolidation démocratique n'est pas incompatible avec la reconnaissance des particularités de chaque pays de la région, reconnaissance qui comprend celle de la situation spéciale des pays qui ont décidé la suppression ou le maintien constitutionnel de leurs forces armées respectives;

Qu'au cours des dernières années, à mesure que se consolidaient la paix et la démocratie, les pays centraméricains ont accompli des progrès notables vers la réalisation de ces objectifs, notamment par les moyens suivants : démobilisation et réduction des effectifs et des budgets militaires; séparation entre les fonctions politiques et celles propres à la défense nationale; suppression du service militaire obli-

¹ Entré en vigueur le 26 décembre 1997, conformément à l'article 70 :

<i>Participant</i>	<i>Date du dépôt de l'instrument de ratification</i>
El Salvador.....	10 mars 1997
Honduras.....	18 décembre 1997
Nicaragua.....	1 ^{er} août 1996

² Nations Unies, *Recueil des Traités*, vol. 1695, p. 382.

gatoire et, le cas échéant, adoption d'un service militaire volontaire; efforts et actions entrepris pour intensifier la lutte contre l'impunité, le terrorisme et la narcoactivité; et professionnalisation croissante des institutions de sécurité publique;

Que le Modèle centraméricain de sécurité démocratique repose sur la suprématie et l'affermissement des pouvoirs civils, l'équilibre raisonnable des forces, la sécurité des personnes et des biens, la victoire sur la pauvreté et la misère, la promotion du développement durable, la protection de l'environnement, l'élimination de la violence, de la corruption, de l'impunité, du terrorisme, de la narcoactivité et du trafic d'armes. Le Modèle centraméricain de sécurité démocratique entend aussi orienter toujours plus ses ressources vers les investissements sociaux.

Qu'il est indispensable, pour réaliser les objectifs et principes énoncés, de poursuivre les efforts mentionnés et d'adopter un instrument juridique cadre qui permette de développer pleinement tous les aspects du nouveau Modèle de sécurité démocratique susceptible de garantir le maintien des succès obtenus;

Conviennent de conclure le présent Traité de sécurité démocratique en Amérique centrale, au titre d'instrument complétant le Protocole de Tegucigalpa.

TITRE I

ETAT DE DROIT

Article premier

Le Modèle centraméricain de sécurité démocratique est fondé sur la démocratie et l'affermissement de ses institutions et de l'état de droit; sur l'existence de gouvernements élus au suffrage universel, libre et secret et sur l'entier respect des droits de l'homme dans les Etats qui constituent la région centraméricaine.

Le Modèle centraméricain de sécurité démocratique a pour raison d'être le respect, la promotion et la protection de tous les droits de l'homme, ce pourquoi ses dispositions garantissent la sécurité des Etats centraméricains et de leurs habitants, en créant des conditions qui leur permettent de se développer sur les plans personnel, familial et social, dans la paix, la liberté et la démocratie. Il s'appuie sur l'affermissement du pouvoir civil, le pluralisme politique, la liberté économique, la victoire sur la pauvreté et la misère, la promotion du développement durable, la protection des consommateurs, de l'environnement et du patrimoine culturel; l'élimination de la violence, de la corruption, de l'impunité, du terrorisme, de la narcoactivité et du trafic d'armes; l'établissement d'un équilibre raisonnable des forces qui prenne en compte la situation interne de chaque Etat et les nécessités d'une coopération entre tous les pays centraméricains afin d'assurer leur sécurité.

Article 2

Le Modèle centraméricain de sécurité démocratique est régi par les principes suivants qui sont en rapport avec le présent Titre :

a) L'état de droit, lequel inclut la primauté du droit, l'existence de la sécurité juridique et l'exercice effectif des libertés civiles;

b) L'affermissement et le perfectionnement constants des institutions démocratiques dans chacun des Etats, en vue de leur renforcement mutuel dans leur sphère propre d'action et de responsabilité, ceci au moyen d'un processus continu et soutenu de consolidation et d'affermissement du pouvoir civil, de la limitation du

rôle des forces armées et de sécurité publique à leurs attributions constitutionnelles et de la promotion d'une culture de paix, de dialogue, de compréhension et de tolérance fondée sur les valeurs démocratiques qui leur sont communes;

c) Le principe de la subordination des forces armées, de police et de sécurité publique aux autorités civiles constitutionnellement établies, issues de processus électoraux, libres, honnêtes et pluralistes; et

d) Le maintien d'un dialogue souple et actif et une collaboration mutuelle sur tous les aspects de la sécurité dans le plein sens du terme afin de garantir le caractère irréversible de la démocratie dans la région.

Article 3

Pour garantir la sécurité des individus, les Parties s'engagent à ce que toute action menée par les autorités publiques cadre avec leur ordre juridique respectif et avec l'entier respect des instruments internationaux des droits de l'homme.

Article 4

Les Parties établissent et maintiennent en tout temps un contrôle efficace sur leurs forces militaires et de sécurité publique par les autorités civiles constitutionnellement établies et veillent à ce que celles-ci s'acquittent de leurs responsabilités dans ce cadre; elles définissent clairement la doctrine, les missions et les fonctions de ces forces et leur obligation de n'agir que dans ce contexte.

Article 5

La corruption, publique ou privée, constitue une menace contre la démocratie et la sécurité des habitants et des Etats de la région centraméricaine. Les Parties s'engagent à ne ménager aucun effort pour l'éliminer à tous les niveaux et sous toutes ses formes.

A cette fin, la réunion des organismes de contrôle de l'Etat des Parties aide la Commission de sécurité de ses conseils pour ce qui touche à la conception, à l'établissement et à la mise en œuvre de programmes et de projets régionaux de modernisation et d'harmonisation des lois, de recherche, d'éducation et de prévention de la corruption.

Article 6

Les Parties ne ménagent aucun effort pour éliminer l'impunité. La Commission de sécurité prend contact avec les institutions et autorités en la matière, afin de contribuer à l'élaboration de programmes conduisant à l'harmonisation et à la modernisation des systèmes de justice pénale centraméricains.

Article 7

Les Parties reconnaissent qu'il importe que leurs autorités publiques, forces militaires et forces de sécurité publique orientent leur action de manière à se conformer aux principes et recommandations figurant dans les résolutions suivantes de l'Assemblée générale des Nations Unies :

a) 40/34¹ Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir.

¹ Nations Unies, *Documents officiels de l'Assemblée générale, quarantième session, Supplément n° 53 (AJ/40/53)*, p. 225.

b) 43/173¹ Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention et d'emprisonnement.

c) 45/113² Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté.

d) 3452 (XXX)³ Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

e) 34/169⁴ Code de conduite pour les responsables de l'application des lois; ainsi qu'aux Principes de base relatifs au recours à la force et à l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, adoptés au Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants.

Article 8

En vue de renforcer la démocratie, les Parties réaffirment leur obligation de s'abstenir de prêter un appui politique, militaire, financier ou de toute autre nature à des individus, groupes, forces irrégulières ou bandes armées qui attentent à l'unité et à l'ordre de l'Etat, ou qui préconisent le renversement ou la déstabilisation du gouvernement démocratiquement élu d'une autre Partie.

Elles réaffirment également l'obligation d'empêcher l'utilisation de leur territoire pour l'organisation ou la conduite d'actions armées, actes de sabotage, séquestrations ou activités délictueuses sur le territoire de l'autre Etat.

Article 9

Les Parties reconnaissent l'importance du Traité d'assistance juridique en matière pénale, signé à Guatemala, République de Guatemala, le 29 octobre 1993⁵, et la nature spéciale des dispositions constitutionnelles et des traités et conventions qui consacrent le droit d'asile et de refuge.

TITRE II

SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DE LEURS BIENS

Article 10

Le Modèle centraméricain de sécurité démocratique est régi par les principes suivants pour ce qui est du présent Titre:

a) La sécurité démocratique est une et indivisible. La solution des problèmes de sécurité humaine dans la région sera par conséquent inspirée par une vision totale et englobante de tous les aspects du développement durable de l'Amérique centrale, dans ses manifestations politiques, économiques, sociales, culturelles et écologiques;

b) La sécurité démocratique est inséparable de la dimension humaine. Le respect de la dignité fondamentale de l'être humain, l'amélioration de la qualité de vie

¹ Nations Unies, *Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-troisième session, Supplément n° 49 (A/43/49)*, p. 310.

² *Ibid.*, quarante-cinquième session, *Supplément n° 49 (A/45/49)*, p. 220.

³ *Ibid.*, trentième session, *Supplément n° 34 (A/100/34)*, p. 95.

⁴ *Ibid.*, trente-quatrième session, *Supplément n° 46 (A/34/46)*, p. 208.

⁵ Voir n° I-34455 du présent volume.

et le plein développement de son potentiel constituent des conditions indispensables à la sécurité sous tous ses aspects;

c) L'aide solidaire et humanitaire face aux urgences, aux menaces et aux catastrophes naturelles; et

d) La prise en compte de la pauvreté et de la misère, considérées comme des menaces pour la sécurité de tous les habitants et la stabilité démocratique des sociétés centraméricaines.

Article 11

Pour contribuer à la consolidation de l'Amérique centrale en tant que région de paix, liberté, démocratie et développement, les objectifs suivants sont fixés en la matière considérée :

a) Garantir à tous les habitants les conditions de sécurité qui leur permettent de participer aux stratégies nationales et régionales de développement durable et d'en bénéficier, en donnant à l'économie de marché l'impulsion qui rendra possible une croissance économique dans l'équité;

b) Etablir ou renforcer les mécanismes de coordination opérationnelle des institutions compétentes, pour rendre plus efficace la lutte, aux niveaux national et régional, contre la délinquance et contre les menaces pour la sécurité démocratique qui requièrent l'utilisation de forces militaires, de sécurité ou de police civile, telles que le terrorisme, le trafic illicite d'armes, la narcoactivité et la criminalité organisée;

c) Renforcer la coopération, la coordination, l'harmonisation et la synergie des politiques visant à la sécurité des personnes, ainsi que la coopération frontalière et l'approfondissement des liens sociaux et culturels entre leurs peuples; et

d) Promouvoir la coopération entre les Etats pour garantir la sécurité juridique des biens et personnes.

Article 12

Le Secrétariat général du Système d'intégration de l'Amérique centrale (SICA) est chargé d'organiser et d'administrer un Indice centraméricain de sécurité et en fait périodiquement connaître l'état aux divers gouvernements, par l'intermédiaire de la Commission de sécurité de l'Amérique centrale.

Article 13

Les Parties s'engagent :

a) A contribuer à promouvoir la campagne régionale en faveur de tous les droits de l'homme et de la culture de paix, de démocratie et d'intégration entre les habitants d'Amérique centrale;

b) A inciter les médias de leurs pays à contribuer aux fins évoquées dans le paragraphe précédent; et

c) A encourager des projets de développement frontalier visant à l'intégration, inspirés par l'esprit de solidarité centraméricaine et de participation démocratique des habitants.

Article 14

Les Parties s'engagent à promouvoir la professionnalisation et la modernisation permanente de leurs organismes de sécurité publique afin de faciliter une lutte aussi vaste et efficace que possible contre les activités délictueuses ainsi que la protection des droits consacrés par la législation interne de chaque pays.

Elles s'engagent également à mettre en place l'Institut centraméricain d'études supérieures de la police.

Article 15

Les Parties reconnaissent que la pauvreté et la misère portent atteinte à la dignité humaine et constituent une menace pour la sécurité des habitants et la stabilité démocratique des sociétés centraméricaines et elles s'engagent par conséquent à donner la priorité aux efforts pour en surmonter les causes structurelles et pour améliorer la qualité de vie des populations.

Article 16

Les budgets nationaux seront aménagés, compte tenu de la réalité de chaque pays, de manière à bénéficier au secteur social dans les domaines de la santé, de l'éducation et autres domaines qui contribuent à améliorer la qualité de vie des êtres humains et des classes les plus défavorisées de la société.

Article 17

Les Parties encouragent la coopération en vue d'éliminer la narcoactivité, le commerce illicite de précurseurs et autres délits connexes, conformément aux accords internationaux, régionaux et sous-régionaux auxquels elles sont parties ou auxquels elles pourraient adhérer dans ce domaine, et notamment aux statuts de la Commission permanente centraméricaine pour l'élimination de la production, du trafic et de l'abus de stupéfiants et de substances psychotropes. Elles établissent à cette fin des mécanismes souples et efficaces de communication et de coopération entre les autorités compétentes en la matière.

Article 18

Les Parties s'engagent à prévenir et à combattre tout type d'activité délictueuse ayant des répercussions régionales ou internationales, tel que le terrorisme, le sabotage, la criminalité organisée, sans exception aucune, et à empêcher par tous les moyens la planification, la préparation et l'exécution desdites activités sur leur territoire.

A cette fin, elles renforcent leur coopération et encouragent l'échange d'informations entre les services responsables des questions de migration, de police et autres autorités compétentes.

Article 19

Les Parties font en sorte, si elles ne l'ont déjà fait, d'entamer les formalités nécessaires pour approuver ou ratifier les conventions internationales suivantes, ou y adhérer:

- a) Convention de 1963 pour la répression de la capture illicite d'aéronefs¹;

¹ Nations Unies, *Recueil des Traités*, vol. 704, p. 219.

b) Convention de 1971 pour la prévention et la répression des actes de terrorisme qui prennent la forme de délits contre les personnes¹, ainsi que de l'extorsion connexe à ces délits lorsque de tels actes ont des répercussions internationales;

c) Convention de 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile²;

d) Convention de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale³, y compris les agents diplomatiques; et

e) Convention internationale de 1979 contre la prise d'otages⁴.

Article 20

Les Parties s'engagent à prendre des mesures pour combattre l'action des bandes organisées, qui s'adonnent au trafic de personnes ayant une stature internationale dans la région, afin de trouver des solutions complètes à ce problème.

Article 21

Les Parties s'engagent à déployer les efforts voulus et à encourager la coopération pour garantir la protection des consommateurs, de l'environnement et du patrimoine culturel centraméricain, conformément aux accords internationaux et régionaux auxquels elles sont parties ou auxquels elles pourraient adhérer sur ces questions, et notamment aux Statuts de la Commission centraméricaine de l'environnement et du développement. Elles établissent à cette fin des mécanismes souples et efficaces de communication et de coopération avec les autorités compétentes en la matière.

Article 22

Les Parties reconnaissent que pour assurer une coopération effective dans ces domaines, il est indispensable, si elles ne l'ont déjà fait, d'entamer les formalités nécessaires pour approuver et ratifier les conventions internationales et régionales sur la protection de l'environnement et du patrimoine culturel, ou y adhérer.

Article 23

Les Parties réaffirment leur volonté de réinsérer comme il convient les populations réfugiées, déplacées et déracinées de leur pays qui retournent volontairement et pacifiquement dans leurs territoires respectifs, pour leur permettre de jouir de tous leurs droits et d'une meilleure qualité de leur vie, dans l'égalité des chances, compte tenu de la situation interne de chaque Etat.

Article 24

Les Parties s'engagent à adopter des positions et des stratégies communes pour la défense légitime de leurs nationaux, à l'étranger, face aux mesures visant à rapatrier ou à expulser les émigrants possédant leurs nationalités respectives.

¹ Nations Unies, *Recueil des Traités*, vol. 1438, p. 191.

² *Ibid.*, vol. 974, p. 177.

³ *Ibid.*, vol. 1035, p. 167.

⁴ *Ibid.*, vol. 1316, p. 205.

Article 25

La Commission de sécurité, sur la base des propositions qu'elle reçoit des organes régionaux compétents et en coordination avec ceux-ci, formule et transmet aux Conseils sectoriels ou intersectoriels pertinents des recommandations sur les questions suivantes, et notamment sur :

- a) Le renforcement des contrôles internes aux frontières, ports, aéroports, espace aérien et mer territoriale respectifs, de manière à pouvoir détecter : le commerce illicite du bois et d'espèces de flore et de faune; le trafic et la manipulation de déchets toxiques et de substances dangereuses; la narcoactivité et les délits connexes, et notamment le commerce illicite de précurseurs; le blanchiment d'argent et autres actifs; le vol de véhicules, navires et aéronefs, sans préjudice des mécanismes régionaux dont il sera convenu pour la prévention et la sanction desdits délits;
- b) La définition des faits délictueux ainsi que l'harmonisation et la modernisation de la législation relative à la protection des consommateurs, de l'environnement, du patrimoine culturel et autres questions où cela pourrait s'avérer nécessaire, afin d'arriver à une norme commune de sécurité;
- c) La conclusion d'accords sur les questions faisant l'objet du présent Titre; et
- d) Les moyens de faciliter la coopération et la coordination entre les organes juridictionnels et les ministères publics des Parties afin d'accélérer les actions tendant à renforcer la lutte contre la délinquance.

TITRE III

SÉCURITÉ RÉGIONALE

Article 26

Le Modèle centranéricain de sécurité démocratique est régi par les principes suivants pour ce qui est du présent Titre :

- a) L'égalité souveraine entre les Etats et la sécurité juridique dans leurs relations;
- b) Le règlement pacifique des différends et la renonciation à l'emploi ou à la menace de la force en tant que moyen de résoudre leurs différends. Les Etats s'abstiennent de toute action susceptible d'aggraver les conflits ou de faire obstacle au règlement des différends éventuels par des moyens pacifiques;
- c) La renonciation à l'emploi ou à la menace de la force contre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de tout Etat de la région signataire du présent Traité;
- d) L'autodétermination de l'Amérique centrale, ce qui signifie que les Etats signataires du présent Traité définissent leur propre stratégie régionale de développement durable et de concertation internationale;
- e) La solidarité et la sécurité des peuples et des gouvernements centranéricains en vue de la prévention et de la solution conjointes des problèmes communs dans ce domaine;
- f) L'interdiction de laisser utiliser leur territoire pour lancer une attaque contre d'autres Etats, comme refuge de forces irrégulières ou pour établir une forme de criminalité organisée;

g) La sécurité démocratique de chacun des Etats signataires du présent Traité est étroitement liée à la sécurité régionale. Aucun Etat ne renforcera par conséquent sa propre sécurité en diminuant celle des autres;

h) La défense collective et solidaire en cas d'attaque armée de la part d'un Etat situé en dehors de la région contre l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance d'un Etat centraméricain, conformément à leurs normes constitutionnelles respectives et aux traités internationaux en vigueur;

i) L'unité nationale et l'intégrité territoriale des Etats dans le cadre de l'intégration de l'Amérique centrale; et

j) Le respect des objectifs et principes de la Charte des Nations Unies (ONU) et de la Charte de l'Organisation des Etats américains (OEA)¹.

Article 27

Constituent des objectifs complémentaires du Modèle en la matière :

a) Etablir un mécanisme préventif, d'alerte précoce, contre les menaces pour la sécurité de toutes catégories et un programme permanent de mesures visant à instaurer la confiance entre les Etats de la région centraméricaine;

b) Poursuivre les efforts engagés en vue d'établir un équilibre raisonnable des forces militaires et de sécurité publique, en tenant compte de la situation intérieure et extérieure de chaque Etat partie, des conditions propres à l'Amérique centrale et de ce que décident les autorités civiles des gouvernements démocratiquement élus des Parties;

c) Etablir un Mécanisme centraméricain d'information et de communication de la sécurité;

d) Etablir ou renforcer les mécanismes centraméricains de règlement pacifique des différends, conformément aux dispositions du présent Traité;

e) Coordonner au plan régional les formes de coopération avec les efforts de caractère international visant au maintien et au rétablissement de la paix et de la sécurité internationale; et

f) Promouvoir la sécurité juridique des frontières des Etats signataires du présent Traité, au moyen de délimitations, de démarcations et du règlement des différends territoriaux en instance, selon le cas, et garantir la défense commune du patrimoine territorial, culturel et écologique de l'Amérique centrale, conformément aux mécanismes du droit international.

Article 28

Sans préjudice du Programme annuel d'activités visant à promouvoir la confiance, que doit préparer et exécuter la Commission de sécurité, les Parties, conformément aux traités auxquels elles sont parties, s'engagent :

a) A notifier par écrit aux autres Parties, par la voie diplomatique, avec un préavis de trente jours au moins, tout projet de manœuvre, déplacement ou exercice militaire, terrestre, aérien ou naval, exécuté dans les conditions arrêtées par la Commission de sécurité en ce qui concerne notamment les effectifs, la position par rapport à la frontière, la nature et la quantité de matériel utilisé; et

¹ Nations Unies, *Recueil des Traités*, vol. 119, p. 3.

b) A inviter les autres Parties à assister au déroulement des activités susmentionnées. Les Parties reconnaissent auxdits observateurs les immunités de juridiction civile et pénale accordées aux agents diplomatiques par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques¹, pendant la durée de leur mission et pour les actes commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 29

Dans le cas d'opérations militaires imprévues, face à des menaces immédiates pour la sécurité, l'Etat qui les mène est tenu de notifier ses activités aussi rapidement qu'il le peut, dans les conditions prévues à l'article précédent.

Article 30

Les Parties s'obligent à lutter contre le trafic illégal d'armes, de matériel et d'équipement militaire, ainsi que d'armes légères de protection personnelle. A cette fin, elles s'engagent également à établir, dans leurs ordres juridiques nationaux, des règles spécifiques, modernes et harmonisées.

Article 31

Lorsqu'une situation de trafic illégal d'armes ne peut être résolue dans le cadre des procédures juridiques nationales, l'Etat ou les Etats concernés s'efforcent de résoudre le problème par voie de communication et de coopération entre leurs autorités compétentes.

Article 32

Les Parties s'engagent à poursuivre leurs efforts en matière de limitation et de contrôle des armements, au moyen d'un équilibre raisonnable des forces, conformément à la situation interne et extérieure de chaque Etat.

Article 33

Pour la réalisation d'un équilibre raisonnable et l'aménagement correspondant des forces militaires et des budgets, il est tenu compte des dispositions constitutionnelles de chacune des Parties et de ses besoins de défense, en prenant notamment pour base des facteurs tels que les conditions géographiques et de frontières pertinentes et la présence de forces ou de conseillers militaires étrangers.

Article 34

Les Parties s'engagent à s'abstenir d'acquérir, de maintenir ou de permettre le stationnement ou le passage sur leurs territoires d'armes de destruction massive et aveugle, y compris d'armes chimiques, radiologiques et bactériologiques. Les Parties s'obligent également à ne pas construire ou permettre la construction sur leurs territoires respectifs d'installations servant à fabriquer ou à entreposer ce type d'armes.

Les Parties reconnaissent la validité du Traité concernant la neutralité permanente et le fonctionnement du Canal de Panama², en leur qualité d'Etats adhérents au Protocole³ du Traité, lequel garantit en tout temps le passage pacifique et ininterrompu des navires de toutes les nations par le Canal de Panama.

¹ Nations Unies, *Recueil des Traités*, vol. 500, p. 95.

² *Ibid.*, vol. 1161, p. 177.

³ *Ibid.*, p. 201.

Article 35

Les Parties, afin d'avoir un contrôle effectif sur les armements, s'engagent à ce qui suit :

a) Présenter, à la Commission de sécurité, avec la périodicité arrêtée par le Conseil des ministres des relations extérieures, un rapport sur la composition de leurs institutions militaires et de sécurité publique, leur organisation, installations, armements, matériels et équipements, à l'exclusion des aspects qui, de par leur nature, relèvent du domaine réservé prévu par la Constitution de chaque Etat;

Ce rapport, qui a caractère de secret d'Etat et de secret régional, est conforme à la présentation de l'inventaire arrêtée par la Commission de sécurité et comprend toutes les données navales, aériennes, terrestres et de sécurité publique nécessaires pour que l'information fournie soit complète, transparente et vérifiable, uniquement et exclusivement par les instances du modèle établi à l'article 47 du présent Traité ou les personnes ou organismes désignés par elles;

b) Fournir des informations, au sein de la Commission de sécurité, sur leurs dépenses militaires et de sécurité publique respectives, telles qu'approuvées dans leurs budgets pour l'exercice fiscal en cours, en prenant comme cadre de référence à cet effet l'Instrument de publication internationale normalisée des dépenses militaires adopté le 12 décembre 1990 par l'Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de l'article 52, alinéa *k* du présent Traité; et

c) Organiser un système d'enregistrement centraméricain des armements et de leurs transferts, conformément à la proposition élaborée par la Commission de sécurité.

Article 36

En ce qui concerne l'information fournie conformément aux dispositions de l'article précédent, chaque Partie peut demander, au sein de la Commission de sécurité, à toute autre Partie les éclaircissements qu'elle estime nécessaires, dans les soixante jours suivant sa présentation. Les Parties s'obligent à apporter les éclaircissements pertinents dans les soixante jours suivant la date de la demande d'explication.

Article 37

La Commission de sécurité organise un registre uniforme pour l'armement, les explosifs et l'équipement à l'usage exclusif des forces armées et de sécurité publique; ce registre est mis à jour au moyen des informations que les Parties s'engagent à fournir constamment.

Article 38

Les Parties s'engagent à présenter, de façon réciproque et conformément aux traités auxquels elles sont parties, au sein de la Commission de sécurité, au cours du premier semestre de chaque année, un rapport sur les conseillers et le personnel militaire étrangers et autres éléments étrangers qui participent aux activités militaires ou de sécurité publique sur leur territoire. Elles tiennent également un registre desdits conseillers qui exercent des fonctions de caractère technique liées à l'entraînement ou encore à l'installation ou à l'entretien de l'équipement militaire, dont elles communiquent copie à la Commission de sécurité.

Le registre est tenu conformément à la réglementation arrêtée par la Commission de sécurité, laquelle peut, en outre, fixer des limites raisonnables en nombre des conseillers de toutes catégories et spécialités militaires et de sécurité publique, en prenant en compte les réalités et les besoins internes de chaque Partie.

Article 39

S'il se produit un incident de nature militaire entre deux, ou plus, des Parties, les Ministres des relations extérieures prennent immédiatement contact pour analyser la situation, éviter l'escalade de la tension, arrêter toute activité militaire et prévenir de nouveaux incidents.

Article 40

Au cas où les canaux directs de communication s'avèreraient insuffisants pour réaliser les objectifs visés à l'article précédent, toute Partie peut demander la convocation d'une réunion de la Commission de sécurité ou du Conseil des ministres des relations extérieures, si elle le juge nécessaire. Dans ce dernier cas, la présidence du Conseil des ministres procède aux consultations voulues avec les Etats membres et peut convoquer au préalable la Commission de sécurité pour qu'elle formule des recommandations.

Article 41

La Réunion des présidents, le Conseil des ministres des relations extérieures et la Commission de sécurité prennent leurs décisions par consensus pour toutes les affaires touchant à la paix et à la sécurité de la région.

Article 42

Toute attaque armée, ou menace d'attaque armée, de la part d'un Etat situé en dehors de la région contre l'intégrité territoriale, la souveraineté ou l'indépendance d'un Etat centraméricain est considérée comme un acte d'agression contre les autres Etats centraméricains.

En pareil cas, les pays centraméricains, à la demande de l'Etat attaqué, agissent conjointement et de manière solidaire, pour assurer la défense juridique et politique de l'Etat centraméricain attaqué, par la voie diplomatique, dans les tribunes et organismes internationaux.

Article 43

En cas d'attaque armée, une fois épuisées les instances de conciliation et de règlement pacifique des conflits, les pays centraméricains, à la demande de l'Etat attaqué, assurent, si possible, en vue du prompt rétablissement de la paix, la défense collective et solidaire face à l'agresseur, au moyen des mesures et des procédures arrêtées au Conseil des ministres des relations extérieures et conformément à leurs dispositions constitutionnelles respectives, à la Charte des Nations Unies, à la Charte de l'Organisation des Etats américains et aux traités en vigueur auxquels ils sont parties.

Le Conseil des ministres établit une organisation opérationnelle spéciale chargée de planifier et de coordonner l'exécution des engagements énoncés dans le présent article ainsi que le soutien opérationnel requis en matière de coopération solidaire face aux urgences, aux menaces et aux catastrophes.

Article 44

Dans l'éventualité d'un conflit armé extérieur et afin de sauvegarder les garanties et les droits de la population, les Parties s'engagent à respecter pleinement les règles et les principes du droit humanitaire international.

Article 45

Sans préjudice des dispositions de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l'Organisation des Etats américains relatives au règlement pacifique des différends, les Parties réaffirment leur obligation de régler tout différend susceptible de mettre en danger la paix et la sécurité de la région, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends.

Article 46

Les Parties réaffirment les obligations qu'elles ont souscrites par le Traité de Tlatelolco du 14 février 1967, visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine, ainsi que l'importance qu'il y a à entamer, si elles ne l'ont déjà fait, les formalités nécessaires pour approuver ou ratifier les conventions internationales suivantes ou y adhérer :

a) Le Protocole de 1925 concernant la prohibition de l'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques¹; et

b) La Convention de 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques, (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction².

TITRE IV

ORGANISATION ET INSTITUTIONS

Article 47

Le Modèle de sécurité démocratique d'Amérique centrale comprend les instances suivantes :

- a) La Réunion des Présidents;
- b) Le Conseil des ministres des relations extérieures; et
- c) La Commission de sécurité.

Les Conseils sectoriels et intersectoriels établissent les coordinations nécessaires avec le Conseil des ministres des relations extérieures, qu'ils informent de toutes leurs décisions et résolutions en matière de sécurité.

Dans ce contexte, les Ministres de la défense et de la sécurité ou leurs équivalents conseillent et aident le Conseil des ministres des relations extérieures sur les questions touchant à l'exécution du Modèle, dans leurs domaines de compétence.

Le Comité consultatif créé par le Protocole de Tegucigalpa peut faire part de ses opinions à la Commission de sécurité sur les questions concernant la sécurité des

¹ Nations Unies, *Recueil des Traités*, vol. 1161, p. 177.

² *Ibid.*, vol. 1015, p. 163.

personnes et des biens visées dans le présent Traité par l'intermédiaire du Secrétariat général du Système d'intégration de l'Amérique centrale.

Article 48

La Réunion des présidents est l'organe suprême du présent Modèle et il lui appartient de connaître les questions de sécurité régionale et internationale, sur lesquelles elle doit se prononcer conformément aux dispositions du Protocole de Tegucigalpa.

Article 49

Le Conseil des ministres des relations extérieures est l'instance compétente pour tout ce qui touche à la sécurité régionale et internationale, en sa qualité d'organe principal de coordination du Système d'intégration de l'Amérique centrale.

Article 50

La Commission de sécurité est un organe subsidiaire d'exécution, de coordination, d'évaluation et de suivi, d'élaboration de propositions, de recommandations en matière d'alerte précoce et, quand il y a lieu, d'action rapide, subordonné à la Réunion des présidents et au Conseil des ministres des relations extérieures.

Article 51

La Commission de sécurité se compose des délégations des Etats centraméricains, lesquelles comprennent les Vice-ministres des relations extérieures et les Vice-ministres ou autorités compétentes dans les domaines de la défense et de la sécurité publique. La délégation de chaque Etat est présidée par le Vice-ministre des relations extérieures.

Article 52

La Commission de sécurité a pour attributions ou fonctions :

- a) D'exécuter les décisions dont, en matière de sécurité, la charge la Réunion des présidents ou le Conseil des ministres des relations extérieures ainsi que celles adoptées par elle dans le cadre de ses compétences;
- b) D'évaluer l'application des accords centraméricains en matière de sécurité;
- c) D'examiner les problèmes de sécurité existant dans la région qui exigent une action concertée et d'élaborer des propositions pour y faire face de manière efficace. Ses études et recommandations sont portées à la connaissance du Conseil des ministres des relations extérieures pour approbation;
- d) D'établir la communication et les coordinations nécessaires, par l'intermédiaire du Secrétariat général du Système d'intégration de l'Amérique centrale, avec les organismes, institutions et secrétariats des sous-systèmes d'intégration régionale, dont la collaboration est jugée nécessaire pour faire pleinement face aux problèmes de sécurité;
- e) De renforcer les mécanismes de coordination opérationnelle dans les domaines de la défense, de la sécurité publique et de la coopération humanitaire face aux urgences, aux menaces et aux catastrophes naturelles;
- f) D'élaborer des propositions de coordination et de soutien régional de concert avec les organismes et les corps internationaux voués au maintien de la paix et

de la sécurité internationale et à la lutte contre les menaces pour la sécurité des personnes et des biens, après les avoir soumises au Conseil des ministres des relations extérieures pour approbation;

g) D'organiser le Mécanisme centraméricain d'information et de communication aux fins de la sécurité;

h) D'élaborer un programme annuel permanent d'activités destinées à instaurer la confiance, auquel les forces armées et de sécurité publique de la région participent, conjointement avec la société civile centraméricaine;

i) D'élaborer le régime de rapports périodiques et le système d'enregistrement des armements et de leurs transferts, de façon à ce que l'information fournie soit complète, transparente et facilement vérifiable, et de formuler des propositions pour l'établissement graduel d'un équilibre raisonnable des forces dans la région;

j) D'examiner l'information fournie par les Parties sur les conseillers et le personnel militaire étrangers et autres éléments étrangers qui participent aux activités militaires ou de sécurité publique sur leur territoire, conformément aux dispositions de l'article 38 du présent Traité;

k) D'examiner l'information fournie par les gouvernements sur leurs budgets militaires et de sécurité respectifs pour l'exercice fiscal en cours et d'élaborer des propositions conjointes pour l'aménagement éventuel des budgets à venir, en tenant compte de la situation interne de chaque Etat;

l) De prendre contact avec les organisations centraméricaines qui groupent d'autres pouvoirs ou organes de l'Etat, afin de convenir de programmes d'harmonisation et de modernisation des législations pertinentes et de programmes de formation des officiers de justice et de police;

m) D'élaborer son règlement interne, qui est porté à la connaissance du Comité exécutif du Système d'intégration de l'Amérique centrale;

n) De fournir tous les moyens nécessaires pour protéger la sécurité et la confidentialité des informations reçues des différents Etats centraméricains; et

o) De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent Traité et de s'acquitter des autres fonctions que celui-ci lui confère.

Article 53

Pour mieux s'acquitter de ses fonctions, la Commission de sécurité peut organiser ses travaux dans le cadre de sous-commissions sectorielles, qui peuvent être chargées de la défense, de la sécurité publique ou juridique, ou être intersectorielles.

Article 54

Le Secrétariat général du Système d'intégration de l'Amérique centrale assure les services de secrétariat technique administratif lors des réunions de la Commission de sécurité et des sous-commissions.

Article 55

La Commission de sécurité se réunit habituellement avec la périodicité fixée par ses membres et, à titre extraordinaire, en exécution d'une décision de la Réunion des présidents ou du Conseil des ministres des relations extérieures, ou encore quand un ou plusieurs de ses membres le demandent pour examiner une question

présentant un caractère d'urgence. La présence de tous les membres est exigée pour les sessions et elle constitue le quorum.

Article 56

En l'absence de consensus pour l'adoption d'une décision, la Présidence de la Commission de sécurité porte la question à la connaissance du Conseil des ministres des relations extérieures qui tranche.

Article 57

Il appartient au Conseil des ministres des relations extérieures, en sa qualité d'organe principal de coordination du Système d'intégration de l'Amérique centrale, d'adopter ou de recommander à la Réunion des présidents les mesures préventives, de gestion des crises ou de règlement des conflits et des différends qu'il juge utiles face aux situations de toute nature qui, aux yeux des gouvernements ou des organes compétents du Système d'intégration de l'Amérique centrale, constituent une menace potentielle pour la sécurité des Etats et de leurs habitants.

Article 58

Les gouvernements, par l'intermédiaire de leurs ministres respectifs des relations extérieures, soumettent à l'examen de la Commission de sécurité les situations visées à l'article précédent. Ils peuvent également s'adresser directement au Conseil des ministres des relations extérieures.

Les organes, institutions et secrétariats du Système d'intégration de l'Amérique centrale, par l'intermédiaire de leur Secrétaire général, peuvent porter à l'attention du Conseil des ministres des relations extérieures toute situation visée à l'article précédent.

Article 59

Sans préjudice du Programme annuel d'activités visant à instaurer la confiance, que doit préparer et exécuter la Commission de sécurité, les Parties s'engagent :

a) A établir et à renforcer des mécanismes de communication directe et rapide entre les autorités frontalières; et

b) A encourager les échanges de données d'expérience et d'informations militaires et de sécurité publique, de consultations et de visites périodiques entre les autorités des institutions de défense, de sécurité publique et autres analogues, ainsi que l'octroi réciproque de bourses d'études dans leurs académies militaires et de police respectives.

Article 60

Le Mécanisme centraméricain d'information et de communication pour la sécurité se compose comme suit :

a) L'Indice centraméricain de sécurité, qui est organisé et administré par le Secrétaire général du Système d'intégration de l'Amérique centrale, avec l'appui des secrétariats et des institutions d'intégration de l'Amérique centrale et des organismes internationaux jugés pertinents; et

b) Le mécanisme permanent de communication que les Parties s'engagent à créer et à mettre en place, pour faciliter un contact sûr, efficace et rapide entre leurs autorités civiles, militaires et de sécurité publique respectives compétentes, entre

elles et avec la Commission de sécurité, en vue de prévenir les incidents, de faire face aux situations d'alerte et de faciliter la réalisation des objectifs et des obligations établis dans le présent Traité.

Article 61

Le Conseil des ministres des relations extérieures veille à l'application des dispositions et à l'accomplissement des obligations établies dans le présent Traité. A cette fin, la Commission de sécurité doit informer le Conseil des ministres des relations extérieures, en s'attachant notamment aux points suivants :

a) L'exécution par les Parties des actes matériels prévus dans le présent Traité, ainsi que la remise en temps utile des rapports exigés;

b) Le respect par les Parties des plafonds établis en matière d'armements, en tenant compte de la situation interne et extérieure de chacune des Parties et des conditions régnant dans la région;

c) L'exécution par les Parties de l'obligation de ne pas introduire les armes interdites à l'article 34 du présent Traité ou qui viendraient à être interdites à l'avenir;

d) L'exécution par les Parties des obligations en matière de notification des activités ou manœuvres militaires, ainsi que toutes autres notifications prévues dans le présent Traité; et

e) Le résultat des enquêtes menées, de sa propre initiative ou sur instruction du Conseil des ministres des relations extérieures, comme suite à la dénonciation de violations des obligations figurant dans le présent Traité.

Article 62

Les enquêtes sont menées par la Commission de sécurité ou par le corps collégial d'experts spéciaux désigné et jugé le plus approprié en l'occurrence. Elles sont effectuées au moyen d'inspections sur place, de compilation de données, de réalisation d'épreuves techniques de laboratoire et de tout autre procédé estimé nécessaire pour une vérification objective des faits.

Article 63

Le Conseil des ministres des relations extérieures est l'organe chargé de coordonner les efforts de l'ensemble de la région, avec les initiatives prises pour lutter contre les menaces pesant sur la sécurité démocratique du continent et d'autres régions du monde; il est donc l'organe responsable de l'élaboration des positions et de la conclusion des accords ou conventions de coopération avec les institutions et corps chargés de maintenir la paix et la sécurité internationales, sauf pour des engagements antérieurs de chaque Etat partie avec la communauté internationale.

TITRE V

CLAUSES FINALES

ARTICLE 64

Le Modèle centraméricain de sécurité démocratique fait partie du Système d'intégration de l'Amérique centrale et vise, par son contenu, à compléter les dispositions du Protocole de Tegucigalpa, auquel le présent Traité est subordonné.

Article 65

Le Conseil des ministres des relations extérieures informe l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation des Etats américains de tous les arrangements et décisions ayant trait à la paix et à la sécurité régionale qui doivent, à son avis, être portés à la connaissance des organes chargés de la sécurité au niveau de l'hémisphère et au niveau mondial.

Article 66

Aucune disposition du présent Traité ne saurait être interprétée de manière contrevenant aux dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Organisation des Etats américains et du Protocole de Tegucigalpa.

Article 67

Tout différend portant sur l'application ou l'interprétation du présent Traité sera porté à la connaissance de la Réunion des présidents; au cas où il ne serait pas résolu, il sera fait usage des moyens de règlement pacifique des différends stipulés à l'article 45 et, le cas échéant, de la faculté de le porter devant la Cour centraméricaine de justice.

Article 68

Le présent Traité admet des réserves.

Article 69

Le présent Traité sera ratifié par chaque Etat signataire, conformément à ses règles constitutionnelles. Le présent Traité et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat général du Système d'intégration de l'Amérique centrale.

Article 70

Le présent Traité est conclu pour une durée indéfinie et entrera en vigueur une semaine après le dépôt du troisième instrument de ratification pour les trois premiers Etats ayant déposé cet instrument, et à la date de dépôt de leurs instruments respectifs de ratification pour les autres Etats.

Article 71

Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Traité, ou encore antérieurement ou postérieurement à la demande de deux Etats parties, la Commission de sécurité convoquera une réunion de toutes les Parties pour évaluer et adopter les modifications jugées nécessaires. Toutes les modifications seront soumises à l'examen de la Réunion des présidents, par l'intermédiaire du Conseil des ministres des relations extérieures.

Article 72

Les dénonciations du présent Traité devront être communiquées au dépositaire, qui les notifiera aux Parties. Ces dénonciations produiront leurs effets un an

après la notification; cependant, les dispositions du présent Traité continueront à s'appliquer aux projets et actions régionales en cours d'exécution jusqu'à ce qu'ils soient menés à bien. Le présent Traité restera en vigueur tant que restent liés par ses dispositions trois au moins des Etats parties.

Article 73

Les dispositions du présent Traité seront interprétées et appliquées conformément à leur lettre, à leur esprit et à la lumière du Protocole de Tegucigalpa et des règles du droit international.

Article 74

Le Secrétariat général du Système d'intégration de l'Amérique centrale, lors de l'entrée en vigueur du présent Traité, en enverra une copie certifiée conforme au Secrétariat général des Nations Unies, aux effets de l'article 102, paragraphe 2 de la Charte de cette Organisation ainsi qu'au Secrétariat général de l'Organisation des Etats américains.

TITRE VI

CLAUSE SPÉCIALE

Article 75

Les Républiques de Costa Rica et de Panama souscrivent au présent Traité compte tenu d'une réserve expresse à l'égard des articles suivants : 26 alinéas *g* et *h*; 27 alinéas *a*, *b* et *c*; 28; 29; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 42 et 43.

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 76

En attendant l'entrée en vigueur du présent Traité, la Commission de sécurité continuera à fonctionner conformément au mandat qui lui a été conféré par la Réunion des présidents et à ceux qui lui ont été confiés par le Conseil des ministres des relations extérieures, en respectant la finalité du présent Traité.

Article 77

Les Parties redoubleront d'efforts pour obtenir la coopération technique et financière requise pour mettre fin à l'existence de champs des mines de la région, conformément aux accords internationaux, régionaux et sous-régionaux auxquels elles sont Parties, ou à ceux auxquels elles adhéreront en la matière.

Article 78

Le présent Traité remplace toutes les règles figurant en matière de sécurité ou de défense dans la Charte de l'Organisation des Etats centraméricains (ODECA) et les accords complémentaires qui auraient été adoptés au niveau régional pour en assurer l'application.

EN FOI DE QUOI, signent le présent Traité en sept exemplaires originaux, en la ville de San Pedro Sula, Département de Cortés, République du Honduras, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt quinze.

Le Président de la République
de Costa Rica :

JOSÉ MARÍA FIGUERES OLSEN

Le Président de la République
du Guatemala :

RAMIRO DE LEON CARPIO

Le Vice-président de la République
du Nicaragua :

JULIO MENA RIVERA

Le Président de la République
de El Salvador :

ARMANDO CALDERON SOL

Le Président de la République
du Honduras :

CARLOS ROBERTO REINA

Le Premier Vice-président
de la République de Panama :

TOMAS GABRIEL ALTAMIRANO DUQUE
